



Política Pública Integral de **Derechos Humanos**

Vida, justicia, paz, diversidad y dignidad

Alcaldía de Bogotá



Tabla de Contenido

Resumen ejecutivo	6
Siglas y abreviaciones	7
Introducción	8
Antecedentes y justificación	10
Antecedentes normativos	10
Antecedentes de política	12
Diagnóstico e identificación de factores estratégicos	16
Eje de derechos civiles y políticos	16
Eje de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales	20
Eje de acceso a la justicia	27
Eje de construcción de paz	29
Eje de igualdad y no discriminación	31
Formulación de la política	39
Objetivo general	40
Objetivos específicos	40
Sectores y entidades corresponsables	42
Seguimiento y evaluación	45
Seguimiento	46
Evaluación	47
Plan de acción	50
Financiamiento	56
Glosario	69
Bibliografía	72



Índice de tablas y gráficas

Tabla 1. Políticas públicas distritales con enfoque diferencial	12
Tabla 2. Políticas públicas distritales con enfoque poblacional.....	12
Tabla 3. Políticas públicas distritales con enfoque territorial.....	13
Tabla 4. Políticas públicas distritales con enfoque de género	13
Tabla 5. Indicadores ambiente Bogotá D.C. (2013 – 2017).....	25
Tabla 6. Histórico de personas desmovilizadas Bogotá D.C. 2012-2017	31
Tabla 7. Factores estratégicos de los ejes de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	34
Tabla 8. Número y porcentaje de productos esperados del plan de acción por eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos.	43
Tabla 9. Distribución de los productos del plan de acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos por sector de la Administración Distrital.	43
Tabla 10. Entidades de la Administración Distrital encargadas de la implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos.....	44
Tabla 11. Tipo de evaluaciones durante la implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y posterior a su ejecución.....	48
Tabla 12. Principios y obligaciones de derechos humanos.....	48
Tabla 13. Resumen de los productos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos	52
Tabla 14. Financiamiento de la Política Pública Integral de Derechos Humanos por objetivo específico	56
Tabla 15. Financiamiento de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, periodo 2020 - 2034...	57
Gráfica 1. Histórico de personas desmovilizadas en Bogotá (2012 – 2017)	30
Gráfica 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Política Pública Integral de Derechos Humanos	51



DOCUMENTO CONPES D.C.

N° 05

DOCUMENTO CONPES DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE BOGOTÁ 2019-2034

Sector Gobierno

Secretaría Distrital de Gobierno

Sectores y entidades corresponsables

Sector Gestión Pública, Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

Sector Gobierno, Secretaría Distrital de Gobierno, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Sector Educación, Secretaría de Educación del Distrito

Sector Salud, Secretaría Distrital de Salud

Sector Integración Social, Secretaría Distrital de Integración Social.

Sector Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y

Deporte

Sector Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente

Sector Movilidad, Empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio S.A., Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial

Sector Hábitat, Secretaría Distrital del Hábitat, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Sector Mujeres, Secretaría Distrital de la Mujer

Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Sector Gestión Jurídica, Secretaría Jurídica Distrital

Octubre de 2019, Bogotá D.C.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá



Andrés Ortiz Gómez
Secretario Distrital de Planeación

Raúl Buitrago Arias
Secretario General

Iván Casas Ruiz
Secretario Distrital de Gobierno

Beatriz Elena Arbeláez Martínez
Secretaria Distrital de Hacienda

Jairo García Guerrero
Secretario Distrital de Seguridad, Justicia y
Convivencia

María Claudia López Sorzano
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deportes

José Andrés Duarte García
Secretario Distrital de Desarrollo Económico

Ángela Anzola de Toro
Secretaria Distrital de la Mujer

Claudia Puentes Riaño
Secretaria Distrital de Educación

Gladys Sanmiguel Bejarano
Secretaria Distrital de Integración Social

Juan Pablo Bocarejo Suescún
Secretario Distrital de Movilidad

Luis Gonzalo Morales Sánchez
Secretario Distrital de Salud

Francisco José Cruz Prada
Secretario Distrital de Ambiente

Guillermo Herrera Castaño
Secretario Distrital del Hábitat

Dalila Hernández Corzo
Secretaria Jurídica Distrital



Resumen ejecutivo

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 *Bogotá Mejor Para Todos* reconoce que existen escenarios de posibles vulneraciones a los derechos de los habitantes de Bogotá. A pesar de los esfuerzos de la Administración Distrital, la ciudad continúa presentando vacíos y debilidades en la materia. Para solucionar este problema, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Decreto nacional 4100 de 2011, se creó el Sistema Distrital de Derechos Humanos y se ordenó la formulación de una Política Pública Integral de Derechos Humanos para Bogotá.

Como producto de lo anterior, la presente política se propone garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos. Para el cumplimiento del propósito, la Política contempla un período de implementación que va desde el año 2019 hasta el año 2034, y el seguimiento se llevará a cabo a partir del plan de acción y el Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos.

La construcción del plan de acción es producto de un ejercicio de concertación entre trece sectores de la Administración Distrital como respuesta a los factores estratégicos que fueron identificados en la fase de agenda pública. Como resultado de la articulación interinstitucional liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno, se construyeron en total 83 productos ligados a 32 resultados esperados que se distribuyen en cinco ejes de derechos con sus objetivos correspondientes, a saber: Eje de derechos civiles y políticos, Eje de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), Eje de acceso a la justicia, Eje de construcción de paz y Eje de igualdad y no discriminación; los productos, a su turno, responden a cuatro líneas de acción: promoción, prevención, protección y monitoreo.

Para implementar las acciones propuestas por la política, cobran singular relevancia los escenarios de coordinación como los consejos consultivos distritales y el Sistema Distrital de Derechos Humanos, con lo cual la Política vincula directamente a la ciudadanía en su ejecución y seguimiento.

Por su parte, el componente de evaluación se desarrollará en tres momentos: en el mediano plazo, seis años después de su implementación; en el largo plazo, once años después; y una evaluación posterior a la vigencia de la política.

El costo estimado para el desarrollo de las acciones propuestas alcanzará un valor de 901,559 millones de pesos.

Finalmente cabe resaltar que la totalidad de los productos que componen la Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá se encuentran alineados con las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.



Siglas y abreviaciones

DAFP - Departamento Administrativo de la Función Pública
DASC – Departamento Administrativo del Servicio Civil
DC – Distrito Capital
DDHH - Derechos Humanos
DESCA - Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
EBC - Encuesta Bienal de Cultura
EGED - Encuesta Goce Efectivo de Derechos
EM - Encuesta Multipropósito
GAOL - Grupos Armados Organizados Ilegales
IDPAC - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
IDU- Instituto de Desarrollo Urbano
IGED - Indicadores de Goce Efectivo de Derechos
JAL - Junta Administradora Local
LGBTI - Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Transgénero e Intersexuales
NNA - Niños, Niñas y Adolescentes
ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU – Organización de Naciones Unidas
PIAA - Plan Integral de Acciones Afirmativas
PICS - Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana
PPIDHH –Política Pública Integral de Derechos Humanos
POT – Plan de Ordenamiento Territorial
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente
SDARIV - Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas
SDG - Secretaría Distrital de Gobierno
SDIS - Secretaría Distrital de Integración Social
SDMUJER - Secretaría Distrital de la Mujer
SDM - Secretaría Distrital de Movilidad
SDP - Secretaría Distrital de Planeación
SDS - Secretaría Distrital de Salud
SDSCJ - Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
SED - Secretaría de Educación del Distrito
SITP- Sistema Integrado de Transporte
SRPA - Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
UPR - Unidad de Planeamiento Rural
UPZ - Unidad de Planeación Zonal

Introducción

El Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 *Bogotá Mejor Para Todos* contiene el proyecto “Bogotá vive los derechos humanos” como respuesta a la situación de derechos humanos en la ciudad. En términos generales, el Plan reconoce que existen escenarios de posibles vulneraciones a los derechos que requieren de la intervención de la Administración. En consecuencia, y dando cumplimiento a lo ordenado en el Decreto nacional 4100 de 2011, crea el Sistema Distrital de Derechos Humanos y ordena la formulación de una Política Pública Integral de Derechos Humanos para Bogotá.

Así las cosas, la Secretaría Distrital de Gobierno, junto con 13 sectores de la Administración Distrital, ha formulado la presente Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá 2018 – 2034. Esta política se propone resolver una problemática que consiste en la existencia de escenarios de posibles vulneraciones a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan Bogotá.

La problemática mencionada se constata al analizar los diferentes obstáculos que impiden el goce efectivo de los derechos de las personas y que contrastan con el amplio catálogo de acciones que la Administración ha desarrollado para remediar esa situación; es decir, la situación persiste a pesar de las intervenciones públicas. De allí que esta Política haya identificado que una de sus causas principales sea la poca articulación intersectorial en los instrumentos de planeación de la ciudad, lo cual causa vulneraciones o impide remediar las ya existentes.

Para formular la Política Pública Integral de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno desarrolló una amplia y ambiciosa fase de agenda pública, que contó con la participación de diferentes sectores de la ciudadanía bogotana. En efecto, para identificar las problemáticas que serían atendidas por la Política, el equipo formulador implementó una serie de ejercicios de participación efectiva, cuyo objetivo era obtener información cualificada y en profundidad sobre la situación de derechos humanos de la ciudad desde un análisis diferencial de sujetos, necesidades y territorios.

Por una parte, estos ejercicios consistieron en 21 foros locales, que se desarrollaron en las veinte localidades de la ciudad y que tuvieron una convocatoria amplia y general, que permitió a los 2.369 participantes de las localidades dar a conocer las problemáticas que les aquejan. Además, este ejercicio de diálogo ciudadano se complementó con un foro distrital en el que participaron 402 personas. De otra parte, para obtener información diferencial y con mayores especificidades, se realizaron 34 grupos focales con minorías, poblaciones de especial protección constitucional y actores relevantes en la garantía de derechos. Ello permitió, en escenarios de exclusiva dedicación, conocer las opiniones, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias de estas poblaciones respecto al goce efectivo de sus derechos. A estos espacios acudieron 475 personas¹.

A partir de la identificación de las problemáticas junto a la ciudadanía fue posible darle inicio a la fase de formulación de la Política, en la cual se propusieron acciones como respuesta a esas problemáticas también por medio de ejercicios participativos. Para ello, se adelantaron nuevamente grupos focales

¹ Los resultados de estos espacios son uno de los principales insumos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos. Para conocer *in extenso* los insumos, las metodologías usadas y el análisis de la información, puede revisarse el documento *Diagnóstico e identificación de factores estratégicos*.



diferenciales con los 9 Consejos Consultivos Poblacionales Distritales, de modo que fueran los representantes de los distintos sectores ciudadanos los que aportaran los insumos con los que el equipo de formulación operaría.

Todo lo anterior, sumado a la decidida voluntad de la Administración y, en especial, de la Dirección de Derechos Humanos, permitió construir la Política Pública Distrital de Derechos Humanos, contenida en este documento del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital - CONPES D.C.-. El documento de política se organiza en cinco secciones, incluyendo esta introducción. El siguiente acápite, denominado antecedentes y justificación, expone, de un lado, cómo la Política responde a los esfuerzos que todo el Estado colombiano ha adelantado en la materia, especialmente a la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y a su instancia distrital; por otro lado, se expone la larga trayectoria que Bogotá tiene en defensa de los derechos humanos, sobre todo por medio de las políticas públicas poblacionales y sectoriales. El tercer capítulo, titulado diagnóstico e identificación de factores estratégicos, presenta la información cuantitativa y cualitativa que da cuenta de la situación de los derechos humanos en Bogotá y de la necesidad de producir un instrumento de planeación integral como esta Política. El cuarto acápite se denomina formulación de la Política, y en él se presentan el objetivo general y los específicos, que se organizan en torno a cinco ejes de derechos; los sectores responsables, lo cual incluye a 13 de los que componen la Administración Distrital; las formas de seguimiento y evaluación; y el plan de acción, que se extenderá por los próximos 15 años y responde a cuatro líneas de acción: prevención, protección, promoción y monitoreo. Por último, el capítulo de financiamiento da cuenta del presupuesto estimado para poner en marcha cada uno de los objetivos específicos de la Política.

Antecedentes y justificación

La Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá tiene su antecedente principal en lo establecido en la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos (2014-2034)² y en los continuos esfuerzos de la Administración en esa materia. A continuación, se presentan los antecedentes i) normativos y ii) de política.

Antecedentes normativos

El marco jurídico en el que operará la Política Pública Integral de Derechos Humanos de Bogotá responde a la normativa sobre derechos humanos, cuyo alcance es universal y que se compone principalmente por los instrumentos del ámbito internacional tanto de derecho duro como de derecho blando que han sido suscritos y ratificados por Colombia, por el desarrollo legislativo nacional y distrital, y por los precedentes jurisprudenciales emitidos por las autoridades judiciales colombianas. En particular, la Política Pública Integral acoge lo referido en la Estrategia Nacional para la Garantía de Derechos Humanos 2014-2034.

En ese sentido, el marco jurídico de la Política Pública Integral siempre debe interpretarse de la forma más amplia y garantista posible, tomando como valores orientadores los principios universales de derechos humanos y los deberes adquiridos por el Estado colombiano en materia de garantía, protección y promoción de los derechos. Así las cosas, las directrices jurídicas que componen el *cuadro* en el que se moverá la Política son amplias y permiten abarcar la problemática que se pretende resolver, lo cual, a su vez, permite un margen de formulación e implementación adecuado.

De lo anterior se desprende que las obligaciones de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos son obligaciones que hacen parte del ordenamiento jurídico nacional en virtud del bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, por medio del cual “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” (Constitución Política de Colombia, artículo 93).

Por su parte, los antecedentes normativos específicos se refieren a la normatividad nacional y distrital que dispone la creación de un sistema especial para la protección de los derechos humanos en la ciudad. En efecto, Colombia posee un Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creado a través del Decreto Nacional 4100 de 2011, que articula y coordina normas, políticas y entidades para promover el respeto y garantía de los derechos humanos. A través de dicho sistema y de la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014–2034, se establece la “hoja de ruta

² La Estrategia Nacional es el instrumento de política pública del nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que busca armonizar las diferentes políticas sectoriales para construir una política integral de derechos humanos. Su objetivo es “el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación” y sus componentes son i) Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades; ii) Cultura y educación en derechos humanos y paz; iii) Derechos civiles y políticos; iv) Derecho internacional humanitario y conflicto armado; v) Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; vi) Derechos humanos y empresa; vii) Justicia; y viii) Construcción de paz.

institucional para la promoción y la protección de los derechos humanos” que avanza hacia la consolidación de la Política Pública Nacional en Derechos Humanos e insta a los diferentes entes territoriales a definir y adoptar políticas públicas en la materia.

El decreto, en el artículo 18, determina la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las entidades del orden territorial, de acuerdo con el marco de sus competencias, con el fin de “diseñar, complementar y consolidar las Políticas Públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial (...), articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el respeto y garantía de los derechos humanos” (Decreto 4100 de 2011).

Adicionalmente, el mismo artículo 18 dispone que cada instancia de las entidades territoriales “será la responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar, en aquello que corresponda, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el nivel territorial, a través de su incorporación en el Plan de Desarrollo y en su respectivo Plan Plurianual de Inversiones”.

Por otra parte, con el fin de ratificar el compromiso de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos de las y los habitantes de Bogotá, y cumpliendo lo establecido por el Decreto 4100, el Concejo de Bogotá expidió en 2016 el Acuerdo 645 que adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016-2020 *Bogotá Mejor para Todos*. Este plan, a su vez, creó el Sistema Distrital de Derechos Humanos y determinó que fuera liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno, en tanto que el artículo 16 del Decreto Distrital 411 de 2016 asignó a esta las funciones de implementar políticas, planes y estrategias para la defensa y protección de los derechos constitucionales (Decreto 411, 2016).

La labor de este Sistema consiste en ser la plataforma articuladora de las normas, políticas, programas e instancias de los niveles nacional, distrital y local, y se encarga también de formular, ejecutar y evaluar la Política Integral de Derechos Humanos en el Distrito Capital. Así, el Sistema Distrital de Derechos Humanos y todas las prácticas y políticas que lo desarrollan “deberán tener un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) como marco normativo de principios y reglas que busque la aplicación coherente de las normas y estándares internacionales vigentes, en materia de Derechos Humanos, en el Distrito” (Acuerdo 645 de 2016, art. 94).

Por su parte, el Plan Distrital de Desarrollo *Bogotá Mejor para Todos*, en el proyecto “Bogotá vive los Derechos Humanos”, fijó la meta 131, que consiste en la formulación e implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos para la ciudad, cuyo objetivo es garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos.

A su turno, el Acuerdo Distrital 698 de 2018 derogó el Acuerdo Distrital 4 de 1995 y estableció los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos. Además, dispuso que la Administración Distrital creara y reglamentara las instancias del Sistema Distrital de Derechos Humanos (Artículo 5), en un término no mayor a seis meses (Artículo 7). En cumplimiento de lo anterior, el Alcalde Mayor expidió el Decreto 455 de 2018, a través del cual se crearon el Comité Distrital de Derechos Humanos y los Comités Locales de Derechos.

Antecedentes de política

El Distrito Capital ha promovido distintas políticas públicas que buscan proteger y garantizar los derechos de quienes habitan y transitan Bogotá en el marco de los mandatos internacionales y nacionales. A este respecto, existen 47 políticas públicas sectoriales y poblacionales que tienen por objeto responder a las necesidades de la ciudad en diversos temas. Al interior de ese grupo, 32 políticas públicas distritales contemplan explícitamente el enfoque de derechos como marco para sus actuaciones, 14 reconocen el enfoque diferencial, 10 refieren al enfoque de género, 9 al enfoque poblacional y 7 al enfoque territorial. En las tablas 1, 2, 3 y 4 se presentan las políticas públicas distritales y los enfoques diferenciales a los que cada una responde.

Tabla 1. Políticas públicas distritales con enfoque diferencial

Políticas públicas distritales con enfoque diferencial
Política Pública de financiación y democratización del crédito en Bogotá, D.C
Política de Salud Oral de Bogotá con participación social para el decenio 2011 - 2021
Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C
Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá
Política Pública de y para la Adulthood en el Distrito Capital
Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá
Política Pública Distrital para el grupo étnico Rrom o Gitano en el Distrito Capital
Plan Sectorial de Educación 2012-2016
Política Pública de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques y Escenarios
Política pública de trabajo decente y digno
Política Distrital de Salud Mental
Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible
Política Distrital Integral de Vivienda y Hábitat

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 2. Políticas públicas distritales con enfoque poblacional

Políticas públicas distritales con enfoque poblacional
Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá 2011-2023
Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Socioeconómico de Bogotá D.C.



Política Pública de y para la Adulthood en el Distrito Capital
Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Política pública de trabajo decente y digno
Política Distrital de Salud Mental
Política para la salud y calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores de Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 3. Políticas públicas distritales con enfoque territorial

Políticas públicas distritales con enfoque territorial
Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital
Política Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
Política para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital.
Política Pública Distrital de Educación Ambiental
Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 4. Políticas públicas distritales con enfoque de género

Políticas públicas distritales con enfoque de género
Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital
Política para la salud y calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores de Bogotá D.C.
Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital
Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
Política pública de trabajo decente y digno
Política Distrital de Salud Mental
Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
Política Pública Contra la Mortalidad Materna y Perinatal

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

Respecto a los mecanismos para la implementación, se encontró que 23 de las 47 políticas públicas señalan dentro de sus lineamientos la creación de comités, comisiones y diferentes espacios de diálogo interinstitucional y que tienen en cuenta la participación ciudadana. En síntesis, no todas las políticas públicas de la ciudad aplican el enfoque de derechos humanos, lo cual supone una de las deficiencias en la aplicación de los instrumentos de planeación que la Política Pública Integral de Derechos Humanos pretende resolver.

El proceso de construcción de estas políticas inicio en el siglo XXI con una visión que aportaba al mejoramiento de la calidad de vida de aquellos sectores históricamente excluidos. El origen de tales políticas provino tanto de procesos de organización social y de agencia ciudadana, por medio de los cuales se movilizaron demandas con el objetivo de hacerlas parte de la agenda pública, así como del liderazgo de las diferentes administraciones que orientaron esfuerzos hacia la generación de cursos de acción encaminados a enfrentar diversas situaciones de inequidad y problemas específicos de la vida de la ciudad (Secretaría Distrital de Integración Social, 2011).

En la formulación de estas políticas se recogieron debates surgidos a finales de los años noventa, cuando se impulsó el reconocimiento del enfoque de derechos humanos, con el objetivo de integrar en las prácticas del desarrollo los principios éticos y legales inherentes a los derechos de las personas (Comisión Intersectorial Poblacional, 2014). Con ese referente como base, de manera más reciente se ha impulsado también la incorporación de los enfoques diferencial, territorial, ambiental y de género. Así, como resultado del camino recorrido en la formulación de políticas públicas sobre los derechos de diferentes poblaciones, hoy la ciudad cuenta con una serie de herramientas normativas que focalizan a determinados grupos o sectores de la población con políticas que aspiran a materializar sus derechos.

A pesar de estos esfuerzos en Bogotá se continúan presentando vacíos y debilidades en la protección y garantía de los derechos humanos, por lo que persisten múltiples situaciones de posibles vulneraciones de derechos en la ciudad. Lo anterior se debe en parte a la desarticulación que existe entre algunos sectores de la Administración Distrital que limita la efectividad del amplio catálogo de acciones desarrolladas para remediar las condiciones de vulnerabilidad, razón por la cual se plantea la Política Pública Integral de Derechos Humanos como instrumento para la articulación interinstitucional, la coherencia conceptual y la acción integral en materia de derechos humanos en la ciudad.

Como se ve, todos estos antecedentes demuestran la perentoria necesidad de formular e implementar una política pública en materia de derechos humanos que, además de incorporar los enfoques de derechos humanos, diferenciales, territorial, ambiental y de género, establezca acciones y lineamientos de manera coordinada y articulada con los demás sectores y autoridades del Distrito. Tales acciones y lineamientos deben proteger integralmente a todas las personas y a sus derechos, reconocer que los problemas no son exclusivos de una población y que su solución no depende de una autoridad exclusiva o de acciones individualizadas y poco coordinadas. Al contrario, el problema requiere de actuaciones conjuntas e intersectoriales, que produzcan un impacto y resultados en cuanto a la garantía de los derechos de las personas, que implementen de forma integral el enfoque de derechos. Con ello se contrarrestarán las circunstancias que vulneren, repitan las vulneraciones o pongan en riesgo los derechos humanos.

De manera más específica, existen dos razones medulares que justifican la formulación de una Política Pública Integral de Derechos Humanos en la ciudad. La primera ratifica que el diseño y la implementación de tal política es una herramienta que fortalece la capacidad de las instituciones y genera la posibilidad



de plantear soluciones de largo plazo, comprometiendo a los gobiernos futuros y desincentivando la creación de programas discontinuos para atacar el problema de forma temporal, independientemente de los cambios de la administración. Así, el planteamiento de una política pública permitirá establecer unas ambiciosas, pero necesarias metas para la garantía de los derechos. Adicionalmente, el fortalecimiento de las instituciones a través de la política pública aumenta la capacidad de la Administración Distrital para proveer bienes y, con ello, contribuir al disfrute de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan la ciudad.

La segunda razón tiene que ver con la oportunidad de pensar, planear y ejecutar acciones más allá de las coyunturas, esto es, generar acciones preventivas que permitan garantizar el disfrute de los derechos por parte de la ciudadanía. Así, la prevención es un factor decisivo a la hora de reducir los costos asociados a la provisión de los bienes públicos, pues corregirá la práctica común de ofrecer soluciones *ex post*, es decir, cuando ya se han producidos las vulneraciones a los derechos.

Por otra parte, también se debe apuntar que la Administración Distrital es consciente de la importancia que representa la protección de los derechos humanos, lo cual implica superar los obstáculos dados por los cambios de gobierno para la continuidad de los programas, las políticas y los proyectos de ciudad. Este hecho lleva a la Administración a formular la presente Política Pública que abarca la mayor cantidad de escenarios de posible vulneración de los derechos de las personas y que se consolida como la hoja de ruta distrital al establecer acciones de mediano y largo plazo en este sentido. Adicionalmente, la Administración está convencida de que la formulación de esta política articula eficazmente a las instituciones en el trabajo de propender por la garantía de los derechos humanos.

Finalmente, la Política Pública en mención se presenta como un instrumento de planeación que abarca los distintos enfoques y derechos, a la vez que permite transversalizar las acciones interinstitucionales pertinentes para garantizarle a los bogotanos y bogotanas la protección de sus derechos. Resulta indispensable además concebir la política pública como una herramienta que permite responder integralmente a las necesidades de la población, que promueve la participación efectiva de la ciudadanía y que facilita los canales de interlocución interinstitucional para evitar la duplicidad de esfuerzos y acciones que impidan una gestión efectiva de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Diagnóstico e identificación de factores estratégicos

Este capítulo tiene como insumo el *Documento diagnóstico e identificación de factores estratégicos* aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación y comprende i) las causas y consecuencias del problema central que abordará la política, de acuerdo con la revisión conceptual, teniendo en cuenta fuentes primarias obtenidas de la fase de agenda pública y fuentes secundarias consultadas y ii) la identificación de los factores estratégicos³.

Esta información permite ilustrar, en términos cuantitativos, las situaciones y barreras que impiden a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos, en términos de sus causas y consecuencias, a través de datos susceptibles de ser desagregados en atención a enfoques y variables diferenciales y territoriales, de acuerdo con las dimensiones establecidas, según la definición de los derechos y sus categorías conceptuales. La información cualitativa de las problemáticas posicionadas por la ciudadanía para esta política pública se presenta en documento anexo (Anexo 2).

La comprensión del problema central se encuentra en términos analíticos, descrita en cada uno de los cinco ejes de derechos que contiene la política⁴. A partir de la identificación, descripción y comprensión de los puntos críticos, siguiendo la metodología de árbol de problemas, se priorizaron los factores estratégicos⁵. Con su resolución, la política busca responder, a su vez, a aquellos problemas que en términos causales restringen, limitan o amenazan la garantía de derechos humanos en la ciudad. Conviene señalar que existen situaciones de posible vulneración a los derechos y que esas situaciones se constatan con los datos que a continuación se presentan.

Eje de derechos civiles y políticos

La información cuantitativa referente al eje de derechos civiles y políticos está asociada al derecho a la vida e integridad personal, el derecho a la seguridad y el derecho a la participación ciudadana. En relación con el derecho a la vida e integridad personal, como derecho fundamental y prerequisite para el goce de los demás derechos humanos, presenta afectaciones por diferentes tipos de violencias, incluido el homicidio.

³ Acorde con la *Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito* (p. 37) y el *Procedimiento para la elaboración de documentos CONPES D.C* (p. 15), las cifras y datos contenidos en este acápite fueron consultados y recabados durante la fase de agenda pública, por tanto corresponden a información disponible entre 2017 y 2018, tal como fue compilada en el Documento de Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos avalado por la Secretaría Distrital de Planeación el 22 de marzo de 2019.

⁴ I) Eje de derechos civiles y políticos, ii) Eje de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, iii) Eje de acceso a la justicia, iv) Eje de construcción de paz y v) Eje de igualdad y no discriminación.

⁵ Los factores estratégicos son el resultado de la priorización de los puntos críticos identificados en la fase de agenda pública, por lo cual conviene advertir que responden a los problemas que fueron posicionados por la ciudadanía que aportó insumos. Así, se trata de una selección de los asuntos que, de acuerdo con criterios técnicos, requieren de intervenciones públicas y, además, son del mayor interés de la ciudadanía. Como consecuencia, no se abarcan *todos* los problemas públicos en materia de derechos humanos, sino aquellos que fueron calificados como estratégicos.

Según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la tasa de homicidios en Bogotá presenta una tendencia decreciente del indicador entre los años 2016 y 2018. Para el año 2016, la tasa fue de 16,32%, que corresponde a un total de 1.302 casos presentados; en el año 2017, la tasa fue de 14,23%, que corresponde a 1.150 casos presentados; en el año 2018, la tasa fue de 13,31%, que corresponde a 1.089 casos. Con relación al número de homicidios según sexo, afecta en su mayoría a hombres y se concentra en jóvenes entre los 18 y 28 años y en adultos entre los 29 y 59 años. La mayor proporción de casos se encuentran asociados a riñas que terminan en muertes. Con relación a la muerte de mujeres, para el mismo periodo de tiempo, el INMLCF reporta en Bogotá, 321 casos, distribuidos de la siguiente forma: 109 en 2016, 110 en 2017 y 102 en 2018.

En lo relativo al análisis por localidad, para el año 2017, el mayor porcentaje en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se presentó en las localidades de Los Mártires (31,10%), Ciudad Bolívar (14.71%) y Santa Fe (13.85%), que están muy por encima de la tasa de toda la ciudad (6.12%). En contraste, para ese mismo año, las localidades que arrojaron un menor número en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fueron Sumapaz y La Candelaria, que no reportan ninguno, y Fontibón (1.18%).

Asimismo, según información brindada por la Fundación Ideas para la Paz (2017), existe una fuerte correlación entre las zonas donde se expende e incauta droga, con las áreas donde se concentra el mayor número de homicidios. Entender las dinámicas de concentración de estos delitos permitirá focalizar los esfuerzos donde la intensidad de la violencia sea más alta.

Si bien la ciudad logra la reducción de los homicidios, aún tiene importantes retos en esta materia, pues se trata de un fenómeno que afecta directamente el derecho a la vida de las personas. En esta medida, se debe seguir trabajando para su prevención, evaluando los factores de riesgo que puedan estar propiciando su ocurrencia.

Según el Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017), en relación con las afectaciones contra la convivencia y la integridad personal, en el año 2016, se presentó un total de 27.250 casos de violencia interpersonal donde el 32.4% corresponde a mujeres y el 67.6% a hombres. Para el año 2017, el total es de 26.504 casos, de los cuales el 31.9% corresponde a mujeres, y el 68.1% corresponde a hombres. De la totalidad de los registros según sexo, este fenómeno se concentra en hombres jóvenes entre los 18 y 28 años y adultos entre los 29 y los 59 años, y son La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe y Chapinero las localidades con mayor presencia de este tipo de violencia.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, se constituye como uno de los principales factores que aquejan la convivencia en la ciudad. En los últimos años (2015-2017), ha tenido un crecimiento de manera sostenida y se evidencia que la mayoría de los casos se ubican en escenarios de violencia de pareja, seguida de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Para el año 2015, se reportó un total de 3.238 casos (1.704 mujeres y 1.534 hombres); 2016, 3.473 casos (1.741 mujeres y 1.732 hombres); y 2017, 3.568 casos (1.812 mujeres y 1.756 hombres) (Observatorio de Violencia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2017). Las localidades que presentan las tasas más altas son: San Cristóbal, Los Mártires y Santa Fe.

Es así como las violencias ejercidas y dirigidas a personas tanto al interior de la familia como a quienes se encuentran en espacios públicos siguen siendo una grave afectación al derecho de la integridad física y personal de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Si bien las campañas de visibilización de esta problemática han logrado disminuir la intolerancia social, aún faltan muchos esfuerzos para que la ciudadanía aprenda a tramitar sus conflictos de forma pacífica, por lo cual requiere abordarse como un

problema de salud pública que aún deja graves consecuencias tanto físicas como psicológicas a sus víctimas.

Con relación al derecho a la seguridad, se contemplan las dinámicas asociadas a sus diferentes vulneraciones, como lo son los hurtos, la percepción de inseguridad en la ciudad y el porcentaje de denuncia de los hechos que afectan la seguridad de la ciudadanía.

Los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización para el primer semestre de 2017 indican que la modalidad delictiva que más les preocupa a los ciudadanos es el hurto a personas con el 49% de los encuestados. El número total de casos de hurtos a personas en Bogotá para el año 2015 fue de 26.533, que afectaron principalmente a los hombres y tuvieron como bienes más hurtados al dinero en efectivo y los teléfonos móviles.

De igual manera se evidencia que este fenómeno es de comportamiento fluctuante y las localidades que presentan un mayor número de casos son Suba (3.421), Kennedy (3.267) y Chapinero (3.007), y el menor número se encuentra en Sumapaz (0.0), Usme (544) y La Candelaria (581). (Encuesta de Percepción y Victimización, I semestre, 2017).

Sin embargo, existe un subregistro en el número de reportes de hurto, dado que muchos ciudadanos optan por no denunciar por diversos motivos, entre ellos el exceso de trámites y la falta de confianza hacia la institucionalidad. El porcentaje de denuncia en la ciudad para el año 2012 fue de 31%, 34% para el año 2013, 23% para el 2014, 18% para el 2015 y 40% para el 2016 (Informe de Calidad de Vida en Bogotá D.C., 2016).

Adicionalmente, según la Encuesta de Percepción y Victimización, para el primer semestre de 2017, entre las principales razones para no denunciar se encuentran “porque demora mucho tiempo” (32%) y “falta de confianza en la autoridad” (23%). Lo anterior demuestra que, a pesar de los esfuerzos por promover la utilización de la modalidad de denuncia virtual, las personas continúan teniendo la percepción de que el trámite es demorado y por esa razón no lo realizan.

La Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Bogotá Cómo Vamos (2017) arrojó que el porcentaje de personas que consideran que la ciudad es segura se mantuvo en un 19% para los dos últimos años (2016 y 2017). En contraste, la percepción de inseguridad tuvo un aumento significativo de 9 puntos porcentuales en el último año. Los factores asociados a la sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos son mayores en el transporte público, en las calles, en espacios públicos con establecimientos comerciales y en espacios para recreación (parques).

Según datos suministrados por la Encuesta de Percepción y Victimización para el primer semestre de 2017, las principales razones asociadas a la inseguridad en Transmilenio son la operacionalidad del sistema relacionada con la alta congestión de los buses (51%), la capacidad de respuesta de las autoridades (17%), seguido de la presencia de habitantes de calle y vendedores ambulantes (12%). Con relación al sistema integrado de transporte público, coincide en primer lugar la congestión y aglomeración en los buses (28%), seguido de poca presencia de policía y vigilancia (16%).

Asimismo, la Encuesta Bienal de Culturas (SCRD-Observatorio de Culturas, 2015) registra que el 80% de la población encuestada observa la calle como un lugar de peligro. Específicamente, las mujeres presentan un mayor porcentaje en cuanto a esta percepción negativa con una diferencia de 1,9 puntos porcentuales. Sobre la información relativa a los parques y espacios de recreación, las mujeres indicaron



una mayor percepción de inseguridad en espacios públicos y parques cercanos a su residencia, con una diferencia de 3,4 puntos porcentuales respecto a los hombres.

Los datos anteriores permiten evidenciar que es necesario fortalecer la infraestructura, dotación, alumbrado y apropiación ciudadana de los parques y espacios públicos, acompañado de estrategias focalizadas sobre aspectos asociados a la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, para contribuir al goce efectivo y disfrute de la ciudad por parte de sus habitantes.

El último componente del Eje de derechos civiles y políticos corresponde al derecho a la participación. Según el indicador proporcionado por la Encuesta Bienal de Culturas 2013, la proporción de mujeres y hombres que afirman conocer y participar en al menos un espacio de participación ciudadana es superior al 60% para ambos sexos. Con base en lo anterior, se podría decir que el nivel de participación es relativamente alto, teniendo en cuenta que es un ejercicio ciudadano voluntario en el que las personas deben invertir tiempo, habilidades y competencias cívicas, al igual que recursos económicos.

El panorama cambia cuando se trata de espacios de organizaciones sociales. Según la Encuesta Multipropósito del año 2014 en su componente de participación ciudadana, se evidenció que tan solo el 14% de los encuestados (entre los 10 años y más) manifestaron participar en alguna organización de tipo social. Lo anterior indica que cuando se trata de ejercicios ciudadanos de carácter más organizativos el nivel de participación es más bajo.

Sobre las brechas de género existentes entre la ocupación de cargos públicos y cargos de elección popular, se observa para el 2011 la participación de 58% de hombres frente a 42% de mujeres. En 2012, 43% de mujeres frente a 57% de hombres y en 2013, 46% de mujeres frente a 54% de hombres (Sistema General de Información Administrativa (SIGIA); Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)).

Con relación al porcentaje de mujeres y de hombres que ejercen cargos públicos de máximo nivel decisorio (alta dirección), las diferencias porcentuales en el 2011 son de 16 puntos a favor de los hombres, en el 2012 corresponde a 14 puntos a favor de los hombres y en el 2013 son 8 puntos también a favor de los hombres (Sistema General de Información Administrativa (SIGIA); Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)). En lo relativo a la participación de hombres y mujeres en cargos públicos de otros niveles de decisión (gerencia pública), en el año 2011 la diferencia fue la más baja (2 puntos porcentuales) entre ambos sexos. Así, para el 2013, se evidenció una diferencia de 6 puntos porcentuales a favor de los hombres.

La información anterior permite inferir que se observan avances positivos en la ciudad con relación a la representación de las mujeres en cargos directivos entre los años 2011 y 2013, con un aumento importante, aunque existen retos para superar la deuda frente a la paridad, en especial en el sector de las localidades (alcaldes y alcaldesas locales) y en las entidades vinculadas como lo son el máximo nivel decisorio y otros niveles de decisión (Secretaría Distrital de la Mujer, 2016).

Por otro lado, las personas de los sectores LGBTI percibieron que sus derechos son vulnerados en un gran porcentaje, sin embargo, esta percepción bajó considerablemente con respecto a 2010 y en todos los sectores, pasando de un 98.16% a un 69.4%. La población más favorecida en este sentido, que en 2014 se sintió menos vulnerada respecto del 2010, fue el sector de las personas bisexuales, el cual pasó de un 96.4% a un 54.9%. El sector más vulnerado es el de personas transgeneristas con un 90.68% (Secretaría Distrital de Planeación, 2015).



En el año 2014 se observa que las personas que se perciben más vulneradas, por encima del promedio, son las mujeres transgeneristas en un 92,9% y los hombres transgeneristas en un 88,8%; los que menos se perciben vulnerados son los hombres bisexuales en un 44,9%. Las principales afectaciones de estos sectores están relacionadas, por un lado, con la exclusión a la que son sometidos, de los espacios familiares, laborales, comerciales, la violencia frente a la vida y a la integridad; dentro de esta afectación se puede contar la negación sistemática de servicios a los que tienen derecho, y se limita la libre expresión de su identidad de género y orientación sexual. Por otro, estos sectores están soportando constantemente amenazas, ataques y hostigamientos contra su vida, integridad física y seguridad. En diferentes espacios, las personas transgéneros afirman que la fuerza pública vulnera reiterativamente sus derechos infringiendo tratos inhumanos y degradantes, así como retenciones ilegales, requisas injustificadas e incluso desconocimiento de su identidad de género lo cual va en contra de su dignidad.

Eje de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

El análisis de la información socioeconómica de la ciudad permite evidenciar sus retos en cuanto a pobreza y desigualdad, teniendo en cuenta conceptos como pobreza monetaria, pobreza extrema, pobreza multidimensional y coeficiente de Gini, entre otros.

La pobreza monetaria, definida como la oportunidad que tiene una persona de acceder a la canasta mínima de alimentos y bienes para su supervivencia de acuerdo con sus ingresos económicos (medida en pesos), tiene en cuenta dos umbrales: la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema. Así, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2017), en el año 2016 la línea de pobreza en Colombia se ubicó en \$241.673 para el total nacional y en \$265.559 para las 13 ciudades principales.

En Bogotá D.C., a pesar de que este indicador muestra una tendencia decreciente entre los años 2012 y 2014, volvió a incrementarse en el año 2015 (10,4%) hasta alcanzar en 2016 la misma cifra de 2012 (11,6%). Sin embargo, al comparar la situación de Bogotá con el nivel nacional se observa que el indicador distrital es muy inferior al del país, con una diferencia porcentual de 16,4 puntos en 2016.

Por su parte, la pobreza monetaria extrema se expresa como el porcentaje de la población cuyo ingreso per cápita no le permite acceder a la canasta mínima de alimentos necesarios para la supervivencia, y es calculada a partir de la línea de pobreza extrema o línea de indigencia.

El indicador para el año 2016 registra que el 2,3% de la población en la ciudad se encuentra en situación de pobreza extrema, información que evidencia que se está afectando el derecho a la alimentación, al acceso a una canasta mínima de alimentos y bienes; por otro lado, refleja que se está vulnerando el derecho al trabajo. Al respecto, se da una tendencia al aumento entre los años 2015 y 2016, presentando en este último año un incremento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2015. A nivel nacional, se observa un comportamiento decreciente, en particular entre los años 2012 y 2015, si bien la cifra pasó de 7,9% en 2015 a 8,5% en 2016, con un incremento de 0,6 puntos porcentuales.

Otro concepto citado es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que se construye teniendo en cuenta cinco componentes (condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda). Este índice involucra en sus componentes (15) quince indicadores a partir de los cuales se determinan como pobres los hogares que estén privados en por lo menos un 33% de estos componentes (DANE, 2017).



De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida, se observa que entre los años 2012 y 2016 Bogotá presentó una tendencia decreciente del IPM. Por el contrario, en el último año (2016) se evidenció un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Por otro lado, el IPM de Colombia disminuyó en todos los años. Al analizar este indicador por regiones se encuentra que, en el año 2016, Bogotá es la región con menor incidencia de IPM (5,9%), seguida de Valle del Cauca (12%) y Antioquia (15,1%).

Además de los indicadores anteriores, se suma la medición a través del coeficiente de Gini, el cual señala la medida de concentración del ingreso económico entre los individuos de una región. Para determinarlo se toman valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo concentra todo el ingreso.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, para el caso de Bogotá, el coeficiente de Gini presentó un leve aumento, pasando de 0,498 en 2015 a 0,499 en 2016, lo cual indica que los ingresos económicos se concentran en una parte de la población de la ciudad, con lo que se vulneran los derechos al trabajo, a la alimentación y posiblemente a la educación. Por el contrario, a nivel nacional el índice mostró una tendencia decreciente durante el período 2012-2016.

En relación con el derecho al trabajo, una de las formas de superar la pobreza es la garantía de su acceso, como derecho fundamental. Los resultados arrojados por los indicadores laborales en los años 2011 y 2016 evidencian que la tasa de desocupación para el año 2011 fue de 8,60%, disminuyendo en 2014 a 6,75%. En 2011, las localidades que tuvieron mayor porcentaje en la tasa de desocupación fueron Ciudad Bolívar con 11,46%, San Cristóbal con 11,31%, Usme con 11,01% y Bosa con 10,53%. Para el mismo año, tuvieron menor porcentaje en la tasa de desocupación las localidades de Chapinero con 4,47%, Suba con 6,86%, y Teusaquillo con 7,00%.

En el mismo año de 2014, las localidades que tuvieron mayor porcentaje en la tasa de desocupación fueron Bosa con 9,09%, Ciudad Bolívar con 8,52%, Usme con 8,32% y Kennedy con 7,47%; y las que tuvieron un porcentaje menor en este mismo indicador fueron las localidades de Teusaquillo con 3,88%, Chapinero con 4,22%, Barrios Unidos con 4,46% y Suba con 5,25%. Entre los años 2011 y 2014, en todas las localidades disminuyó la tasa de desocupación, registrando un porcentaje menor de personas sin empleo, situación que mejora la garantía del derecho al trabajo, con excepción de la localidad de Kennedy donde aumentó en este mismo periodo de 7.35% a 7.47% (Observatorio de Desarrollo Económico, SDE, 2016).

Sobre la tasa de informalidad, la tasa de desocupación se mantuvo igual para Bogotá en el año 2011 y 2014 en un 37% (SDE, 2016). En 2011, las localidades que tuvieron mayor porcentaje en este indicador fueron Los Mártires con 50%, Usme con 48%, Ciudad Bolívar con 47%, San Cristóbal y Rafael Uribe con 46%; y las que tuvieron menor porcentaje en esta tasa, para el mismo año, fueron las localidades Teusaquillo y Chapinero con 20%, y Usaquén con 22%.

En 2014, las localidades que tuvieron los mayores porcentajes en la tasa de informalidad fueron Los Mártires con 55%, Santa Fe con 50%, Usme con 47% y Ciudad Bolívar con 46%; y las que tuvieron menor porcentaje en este indicador, para el mismo año, fueron las localidades de Teusaquillo con 19%, Chapinero con 20% y Usaquén con 25%. Entre los años 2011 y 2014, las localidades en las cuales aumentó la tasa de informalidad fueron Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Fontibón y Usaquén, y, en las que disminuyó fueron Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Barrios Unidos, Engativá, Suba y Teusaquillo. Respecto al año 2017, se evidencia un aumento de la tasa de desocupación para todas las localidades, a excepción de las localidades de Bosa, Chapinero y Teusaquillo.

Con relación a los indicadores laborales desagregados por sexo, para los años 2014 y 2016, la población económicamente activa⁶ y la tasa de ocupación⁷ presentan mayores porcentajes en hombres (51,9% y 52,3% respectivamente). En el caso de las mujeres, la tasa de población económicamente activa en el 2014 es de 48,3% y en el 2016 de 47,7%. La tasa de ocupación en el año 2014 es de 59,7% y en el año 2016 es de 58,0% (SDE, 2016).

El indicador de la tasa de desocupación muestra que la participación de las mujeres fue mayor durante los dos años de la encuesta. En 2014, estuvo compuesta por 42,8% de los hombres y 57,2% mujeres. Para el año 2016, estuvo compuesta por 48,0% hombres y 52,0% mujeres. De acuerdo con la información presentada, es importante prestar atención a las problemáticas que afectan el derecho al trabajo, como en el tema de la población que está desocupada, y aquella que trabaja de manera informal, y de igual manera darle solución a aquellas situaciones que no permiten la garantía del derecho.

Con relación al derecho a la educación, las tasas de deserción, de cobertura bruta y de analfabetismo entre los años 2012 y 2015 permiten abordar el derecho a la educación en la ciudad. Sobre la tasa de deserción, el año con mayor desvinculación o interrupción de estudios es 2012, con 3,10% del total de la población de Bogotá D.C.; y el nivel educativo de secundaria concentra los mayores porcentajes con 4,10% para el año 2012. En el año 2013 es de 3,50%, en el 2014 es de 3,05% y en el 2015 es de 3,59%.

Por otro lado, para el año 2014, en todos los niveles educativos la tasa de deserción a nivel distrital disminuyó. En preescolar fue de 2,08%, en primaria de 1,80%, en secundaria con 3,05% y en media con 2,01%, para un total de 2,31% en Bogotá.

Sobre la tasa de cobertura bruta, por nivel educativo (2012 a 2015), el año 2012 mostró el mayor porcentaje en la tasa de cobertura bruta con 99,3% del total de Bogotá. Asimismo, el nivel educativo de secundaria presentó un mayor porcentaje según la tasa de cobertura bruta, pues de 107,8% en 2012 disminuyó a 104,5% en 2013; aumentó a 106,2% en 2014 y disminuyó nuevamente a 103,0% en el 2015 (SED, 2017).

La tasa de cobertura bruta presentó un menor porcentaje en el nivel de educación preescolar, pues según el indicador ésta fue de 83,3% en el año 2012. Del mismo modo se observa que aumentó a 86,9% en 2013, disminuyó a 81,9% en 2014 y aumentó a 82,0% en 2015, indicando que en este nivel escolar los alumnos matriculados tienen la edad apropiada para el nivel educativo. Para el total de la ciudad, el año 2015 fue el que presentó el menor porcentaje, con 95,8% en la tasa de cobertura bruta.

En relación con el alfabetismo, en 2011 (sin incluir Sumapaz), el mayor porcentaje de personas de 15 años o más con capacidad para leer y escribir se presentó en las localidades de Usaquén con 99,4%, Antonio Nariño, los Mártires y Barrios Unidos con 99,2%; y las localidades con menor porcentaje en este mismo indicador fueron San Cristóbal con 96,4, Rafael Uribe 97,1%, y Santa Fe con 97,2%. Para el año 2014, el mayor porcentaje de las personas de 15 años o más con capacidad para leer y escribir se presentó en: Chapinero con 99,4%, Antonio Nariño con 99,2% y Fontibón y Engativá con 99,1%. Las localidades con menor porcentaje de personas de 15 años o más con capacidad para leer y escribir fueron

⁶ Está conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo.

⁷ Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).

Santa Fe con 96,5%, San Cristóbal con 97,4%, Usme con 97,5%, y Puente Aranda con 97,6% (Encuestas Multipropósito 2011- SED-DANE, 2014).

En la localidad de Chapinero se evidenció un aumento en el porcentaje de este indicador, pues pasó de 97,6% en 2011 a 99,4% en 2014. En el año 2011, en Bogotá, el 99,1% de las personas de 15 años o más sabían leer o escribir. En 2014, disminuyó en 98,6%. Estos resultados indican que el Distrito avanza en el derecho a la educación y estaría próximo a garantizar que el total de su población sea alfabeta.

En cuanto a la medición de la calidad de la educación a través del rendimiento en las pruebas de Estado, la ciudad presentó un aumento anual durante los años 2014 (72,3%), 2015 (74,6%) y 2016 (80,3%) para los colegios oficiales clasificados en las categorías A+, A y B, resultados que evidencian su mejora. Las localidades que alcanzaron un mayor porcentaje en las pruebas fueron Barrios Unidos con el 100% para los tres años, Antonio Nariño y Teusaquillo con 100%, Puente Aranda con 100% en 2014, porcentaje que disminuyó a 93,3% en 2015 y aumentó nuevamente al 100% en 2016 (SED, 2016).

Es así como las localidades que tuvieron menor porcentaje en las pruebas fueron Ciudad Bolívar en el año 2014 con 25,7%, en el año 2015 con 32,4% y para el año 2016 con 55,5%; Santa Fe con 37,5% en el año 2014, 28,6% en el año 2015 y 28,5% en el año 2016; La Candelaria con 50,0% en el año 2014 y Usme con 46,9%, 50,0 y 65,7 en los años mencionados. Lo anterior demuestra que en 2016 se alcanzaron los mejores puntajes en este indicador.

A partir de los resultados, es pertinente indicar que se debe solucionar la problemática de la deserción escolar en todos los niveles educativos y seguir mejorando en la calidad de la educación, para que este derecho sea garantizado a toda la población.

En relación con el derecho a educación en el área rural de Bogotá, para el año 2017 el número de años promedio de educación de las personas de 15 a 24 años fue mayor en la localidad de Chapinero con 11,0%, y Usaquén y Suba con 10,3%, y las localidades que presentan menor número de años promedio de educación son la localidad de San Cristóbal con 9,5% y Usme con 9,6% (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2017).

En relación con el número de años promedio de educación de las personas de 15 a 24 años en el área rural para el total de Bogotá fue de 9,9% en el año 2017 (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, 2017).

Con respecto al sector de la salud pública, el análisis descriptivo en cuanto a cobertura de población afiliada al régimen subsidiado de salud durante el período 2012-2015 permite observar que el porcentaje de la afiliación no tuvo ninguna variación significativa. En contraste, se observa que el indicador evidenció un decrecimiento en el año 2016 de 2% con respecto al año anterior. Las localidades con mayores porcentajes de población afiliada al régimen subsidiado son Santa Fe (34,45%), Usme (30,56%), San Cristóbal (25,38%) y Ciudad Bolívar (25,37%) y las que cuentan con menores porcentajes son Teusaquillo (1,48%), Barrios Unidos (4,56%), Usaquén (6,04%) y Fontibón (6,07%) (Portal Geoestadístico Secretaría Distrital de Planeación).

Sobre la razón de mortalidad materna por cada 1.000 nacidos vivos según localidad de residencia, para el año 2017, cuatro localidades superaron la tasa del total de Bogotá. La tasa más alta corresponde a la localidad de Barrios Unidos (190,1), seguida de Rafael Uribe (125), Ciudad Bolívar (104,2) y Bosa (73,8). El indicador a nivel de Bogotá ha tenido un comportamiento fluctuante en los últimos seis años. En el último año (2017) se observa un incremento de 7,0 puntos porcentuales con respecto al año anterior.



Al revisar la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos vivos según localidad de residencia, en el año 2017 las localidades de La Candelaria, Fontibón y Engativá presentaron las mayores tasas. A nivel de Bogotá se observa una tendencia decreciente para todos los años, exceptuando el año 2016, en el que la tasa presentó un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior (Portal Geoestadístico-Secretaría Distrital de Planeación, 2016).

Con relación al derecho a la vivienda en la ciudad, el déficit de vivienda cuantitativo⁸ pasó de 5,3% en el año 2011 a 3,6% en el año 2014. Sobre las localidades que presentaron mayor porcentaje en el déficit cuantitativo se encuentran Ciudad Bolívar con 14,3% en el año 2011, indicador que disminuyó a 6,2% en el año 2014; San Cristóbal con 10,3% en el 2011, indicador que disminuyó en el 2014 a 5,1%; y Usme con 9,3% en el año 2011, indicador que disminuyó a 4,5% en el 2014. Las localidades que presentaron menor porcentaje en el déficit cuantitativo fueron Chapinero con 0,7% en el año 2011, indicador que aumentó a 0,9% en el año 2014; Teusaquillo que se mantuvo igual en los dos años citados, con 1%; y Usaquén con 2,2% en el año 2011, indicador que disminuyó a 1,6% en el año 2014 (Encuestas Multipropósito 2011-2014, Secretaría Distrital de Planeación (SDP-DANE 2014).

En cuanto al déficit de vivienda cualitativo⁹, hubo una reducción en Bogotá de 6,5% en 2011 a 5,5% en el año 2014. Las localidades que presentaron mayor porcentaje en el déficit cualitativo fueron Usme con 12,8% en el año 2011, indicador que disminuyó en el año 2014 a 9,8%; Tunjuelito con 11,1% en el año 2011, indicador que disminuyó a 6,1% en el año 2014; y Bosa en el 2011 con 10,5%, indicador que disminuyó a 7,4% en el 2014. Las localidades que presentaron menor porcentaje en el déficit cualitativo fueron Chapinero con 2,1% en el año 2011, indicador que aumentó a 2,5% en el año 2014; Puente Aranda con 2,7% en el año 2011, indicador que aumentó a 3,4% en el 2014; y Teusaquillo con 2,9% en el año 2011, indicador que disminuyó a 1,3% en el año 2014 (Encuestas Multipropósito 2011-2014, SDP-, DANE, 2014).

Sobre el derecho a la vivienda en el área rural, en el año 2017 se evidencia que la localidad que presenta más hogares con vivienda totalmente pagada es Ciudad Bolívar (50,5%), seguida por Chapinero (46,2%). La localidad que presenta menos hogares con vivienda totalmente pagada es Usaquén (22,6%). En cuanto a los hogares rurales que viven en arriendo, la localidad que presenta el mayor porcentaje es Chapinero (29,0%) y la localidad con menores hogares en arriendo es San Cristóbal (11,1%) (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2017). En la ciudad, 44,2% de los hogares tienen vivienda propia totalmente pagada, 22,5% viven en arriendo y 3,7% están pagando su vivienda propia. (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, 2017).

En cuanto a la proporción de viviendas con problemas de inseguridad en Bogotá, las localidades que presentaron mayor porcentaje se encuentran en Usme con 88,8% en el año 2011, indicador que disminuyó a 84,9% en 2014; Los Mártires con 86,7% en el año 2011, indicador que disminuyó a 85,5% en 2014; y Ciudad Bolívar con 84,5%, indicador que disminuyó a 79,1% en el año 2015.

Las localidades que presentaron menor porcentaje en la proporción de viviendas con problemas de inseguridad fueron Chapinero con 48,9% en el 2011, indicador que disminuyó en el 2014 a 46,4%; Usaquén con 54,3% en el año 2011, indicador que disminuyó a 54,1% en el año 2014; y Teusaquillo con

⁸ La cantidad de viviendas existentes es suficiente para albergar a la totalidad de la población. (S.f.).

⁹ Este índice cuantifica el número de viviendas que no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen una calidad de vida adecuada a sus habitantes. (S.f.).



61,4%, indicador que aumentó a 65,5% en 2014. Para el año 2011, el 75,8% de las viviendas de Bogotá presentaron problemas de inseguridad, pero disminuyeron en el 2014 a 69,4%. Los resultados indican que en 18 de las 20 localidades, las viviendas con problemas de inseguridad disminuyeron a excepción de Rafael Uribe Uribe que pasó de 82% (2011) a 87,4% (2014), y Teusaquillo, que pasó de 61,4% (2011)

Indicador/Año 2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Cobertura Residencial y Legal Servicio de Acueducto CAC	99,92	99,93	99,96	99,97	99,97	99,94
Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana-DRRSDJ (toneladas)	2.290.144,01	2.345.920,07	2.351.131,07	2.269.533,13	2.253.072,09	2.295.459,73
Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontada Anualmente-PEVA	115.525	59.605	110.369	89.260	8.627	173.953,50
Índice de Calidad Ambiental de Bogotá- ICAB	43,62	41,01	39,9			
Superficie de Área Verde por habitante-AVUpc				10,07		

a 65,5% (2014) (Encuestas Multipropósito 2011-2014 (SDP-DANE, 2014).

Se evidencia que es importante intervenir en los dos déficits presentados, tanto el cualitativo como el cuantitativo, para garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda, superando los problemas como el de la inseguridad.

Sobre el derecho a un ambiente sano y acceso a agua potable, se encuentran indicadores ambientales de Bogotá D.C. entre los años 2013 y 2017, como registra la siguiente tabla.

Tabla 5. Indicadores ambiente Bogotá D.C. (2013 – 2017)

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá D.C., 2017

En cuanto a la disponibilidad y consumo de agua en las localidades, el indicador de Cobertura Residencial y Legal del Servicio de Acueducto (CAC) brinda información sobre el porcentaje de suscriptores con agua potable, en relación con el total proyectado que demanda el servicio en la ciudad. Se destaca el alto nivel de cobertura para todos los años; sin embargo, la norma exige que la cobertura local sea del 100%, por lo cual el indicador no cumple el requerimiento.

Por otra parte, es importante apuntar que el relleno sanitario Doña Juana (donde se hace la disposición final de los residuos sólidos de Bogotá) recibe un número de toneladas por año provenientes del servicio ordinario de aseo (residuos convencionales y hospitalarios) de Bogotá. El indicador presenta comportamiento fluctuante del número de toneladas por año. En el último reporte (2017) se evidencia un incremento de 42.387 toneladas de residuos sólidos con respecto al año inmediatamente anterior.

Con relación a la contaminación visual, el indicador más cercano es el correspondiente al número de desmontes de publicidad visual por incumplimiento de la normatividad ambiental existente y/o por no tener registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Lo anterior obliga a que las autoridades tengan que hacer operativos de control al interior de todas las localidades. El indicador no muestra una tendencia determinada; tiene un comportamiento fluctuante. En el último año se registró un incremento de 165.326 elementos de publicidad exterior desmontados.

El Índice de Calidad Ambiental mide el estado de los componentes básicos del ambiente, sus características y modificaciones ocurridas, debido a procesos sociales y económicos subyacentes. El índice toma valores entre 0 y 100, siendo 0 el peor desempeño del índice y 100 el mejor desempeño (Observatorio Ambiental, 2014). En este orden de ideas, el indicador no cumple con la expectativa esperada, con un índice para el año 2012 de 43,62, para el 2013 de 41,01 y para el año 2014 de 39,9.

Con respecto a la superficie de área verde por habitante, este indicador muestra la relación existente entre los metros cuadrados de espacios naturales verdes para cada uno de los habitantes, con relación al total de la población. Para el año 2015, esta cifra fue de 10,7 metros cuadrados por habitante. Es así como el derecho al ambiente, a partir de los resultados expuestos, evidencia el requerimiento de una mayor intervención oportuna en las problemáticas de contaminación visual y calidad del ambiente para que se pueda garantizar el derecho a un ambiente sano.

En relación con el derecho a la cultura, el indicador de prácticas deportivas presenta el porcentaje de personas de 13 años en adelante que practica algún deporte en las diferentes localidades. Con base en los datos del Observatorio de Culturas, se encuentra que, en el año 2015, el porcentaje de población que practica alguna actividad deportiva es de 33,9%. Las localidades que presentan los mayores porcentajes son Usaquén (44.4%), Engativá (42%), Suba (39.9%), La Candelaria (37.3%). Los menores porcentajes se encuentran en Kennedy (26%), Usme (27.1 %) y Bosa (29%) (Portal Geoestadístico Secretaría Distrital de Planeación, 2017).

La Encuesta Bienal de Culturas (2015) indica que el 48,4% de los hombres mayores de 13 años practicó algún deporte en ese año, contra un 50,9% que no lo hizo. En contraste, solo el 20,7% de las mujeres mayores de 13 años lo realizaron, contra un 79,0% que se abstuvo de practicarlo. Menos del 50% de la población practica alguna actividad deportiva, y de quienes lo hacen, resulta menor la participación de las mujeres.

Con relación al porcentaje de población mayor de 13 años que practica alguna actividad artística de forma habitual, se observa que, en el año 2015, el 17,8% de las personas en la ciudad manifestó realizar de manera frecuente prácticas artísticas. Las localidades de Usaquén (22.7%), Puente Aranda (20.9%) y Engativá (20.6%) presentaron los mayores porcentajes de este indicador. Los menores porcentajes se encuentran en Antonio Nariño y Los Mártires (13.1%), y San Cristóbal (13.3%) (Portal Geoestadístico Secretaría Distrital de Planeación, 2017).

El porcentaje de hombres y mujeres que practica alguna actividad artística de forma habitual es similar. Para el caso del sexo masculino, el 18,2% manifestó que realizaba actividades artísticas, contra un 81,4% que se abstuvo de hacerlo. En contraste, el 17,4% de las mujeres respondió que practicó alguna actividad artística, frente a un 82,1% que decidió no hacerlo. (EBC 2015: SCRD-Observatorio de Culturas, 2015).

En las localidades, la participación en las organizaciones deportivas y recreativas aumentó entre el año 2013 y 2015 exceptuando la localidad de Rafael Uribe Uribe, pero aun así la participación corresponde a

menos del 30% del total de la población. Las localidades con mayor participación son Usaquén (21%), Teusaquillo (20.3%) y Barrios Unidos (14.8%). Las de menor participación son Rafael Uribe con 5.9% y San Cristóbal y Usme, ambas con 7.6% (Portal Geoestadístico Secretaría Distrital de Planeación, 2017).

Según la Encuesta Bienal de Hogares, en lo relativo al indicador de pertenencia a organizaciones de tipo deportivo o recreativo para el año 2015, se presenta una diferencia de 6,2 puntos porcentuales entre los hombres y las mujeres. El 15,5% de los hombres manifestó que pertenecía a algún club de índole deportiva o recreativa, mientras que solo el 9,3% de las mujeres encuestadas respondió positivamente a la misma cuestión. Lo anterior indica que, en la ciudad, más de la mitad de la población no participa en actividades artísticas y deportivas y no se está dando un goce efectivo del derecho a la cultura, debido a la baja participación ciudadana.

En cuanto al derecho a la cultura en el área rural de Bogotá, en el año 2017, el 15,3% de las personas de 10 años o más practicaron deporte o realizaron actividad física en los últimos 30 días y el 60,4% de las personas no practicó ningún deporte ni tuvo actividad física. La localidad que tuvo mayor participación fue Santa Fe (38,5%) y la localidad que tuvo menor participación fue Ciudad Bolívar (6,2%). Más de la mitad del total de la población no participa en actividades culturales y deportivas.

Eje de acceso a la justicia

Los datos relacionados con el derecho de acceso a la justicia comprenden información a nivel distrital y local sobre casos atendidos en casas de justicia, información sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes e indicadores sobre denuncia.

Los casos atendidos refieren a las casas de justicia y centros de convivencia. Las casas de justicia, como centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. En el Distrito operan 12 casas de justicia con el objetivo de acercar la justicia al ciudadano y fomentar el respeto de los derechos humanos. Según cifras de la rendición de cuentas de 2017, se atendieron un total de 120.000 personas en el año 2016, cifra que se incrementó en el 2017 a más de 160.000.

Con relación a las solicitudes atendidas en casas de justicia según sexo (reportadas al Sistema de Información de Casas de Justicia -SICJ- año a año por la Dirección en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho), en más de la mitad de los casos entre los años 2013 y 2018, la participación del sexo masculino ha sido mayor en cuanto al número de requerimientos de atención y resolución de controversias. Esta diferencia se puede explicar porque uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia es la falta de garantías para denunciar. Muchas de ellas no lo hacen por miedo, culpa, desconocimiento, falta de confianza en la justicia, entre otros aspectos (Profamilia, 2010, p. 397). En Bogotá una de las rutas de acceso a la justicia para las mujeres son las casas de justicia, ya que en ellas funcionan distintos operadores de justicia y entidades distritales como Comisaría de Familia, Fiscalía, Inspección de Policía, Medicina Legal, Unidad de Mediación y Conciliación, Jueces de Paz, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, siguiendo los lineamientos establecidos por el Acuerdo 676 de 2017.

Esta diferencia se puede explicar porque la ruta especializada de acceso a la justicia y eliminación de las violencias de las mujeres es distinta en la ciudad de Bogotá y son atendidas en espacios diferenciales, por ejemplo, en las casas de igualdad de oportunidades. Adicionalmente, cuando las mujeres son víctimas de violencias, la Ley 1257 de 2008 establece en su artículo 8 que tendrán derecho a decidir

voluntariamente si pueden ser confrontadas con su agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales y de otro tipo, por lo cual en algunos casos anularía de plano la posibilidad de conciliación alguna. Además, uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia es la falta de garantías para denunciar. Muchas de ellas no lo hacen por miedo, culpa, desconocimiento, falta de confianza en la justicia, entre otros aspectos (Profamilia, 2010, p. 397).

En cuanto a las solicitudes atendidas en casas de justicia por orientación sexual del usuario (Ministerio de Justicia y del Derecho - Dirección en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) - Sistema de Información de Casas de Justicia SICJ), resulta mayoritario para población heterosexual, seguida de la población de los sectores gays y lesbianas. El 2014 fue el año en que se atendieron más solicitudes por orientación sexual del usuario, con un total de 117 (2 a personas que se identifican como bisexuales, 1 a persona que se identifica como gay, 111 a personas que se identifican como heterosexuales, y 3 solicitudes atendidas a las personas que se identifican como lesbianas). En el año 2015 se recibieron 59 solicitudes (3 a personas que se identifican como gays, 56 que se identifican como heterosexuales), en el 2016, 66 solicitudes (6 que se identifican como gays, 60 de quienes se identifican como heterosexuales), en el año 2017 se recibieron 38 solicitudes (4 de quienes se identifican como gays, 34 de quienes se identifican como heterosexuales) y en el año 2018 se recibieron 33 solicitudes (12 de quienes se identifican como gays y 21 de quienes se identifican como heterosexuales). Se evidencia que año a año disminuyen las solicitudes atendidas por las casas de justicia.

Con relación al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el número de menores en conflicto con la ley que ingresan al SRPA presenta una tendencia decreciente, en particular para el periodo 2013-2015. Específicamente para el año 2015, se evidencia una reducción de 1707 casos respecto al año anterior.

En relación con la Encuesta de Percepción y Victimización 2017 de la Cámara de Comercio Bogotá, del primer semestre, es posible identificar las motivaciones de los ciudadanos para no realizar las denuncias respectivas cuando son víctimas de un delito. El 32% manifestó que la principal razón para no hacerlo es la demora en el trámite, le sigue la falta de confianza en la autoridad, junto con la complejidad del trámite, en un 23%. Estos resultados muestran la ineficacia de las instituciones públicas en el indicador de denuncia pues las personas manifiestan que prefieren no denunciar por el exceso de trámites y demoras.

Sobre la confianza hacia la institucionalidad en el desempeño de justicia, según la Encuesta de Percepción y Victimización (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017), el 7% de los ciudadanos confían en la institución en cuanto a la rapidez en la administración de justicia. Los datos también muestran que los ciudadanos tienen el 9% de confianza en lo que se refiere a la efectividad del sistema y se traduce en poner a disposición de la justicia a los presuntos delincuentes para así controlarlos y reducir los delitos.

En cuanto a la atención al menor delincuente, el 10% de la ciudadanía indica que confía en ella. Sobre la confianza hacia la institucionalidad en el desempeño de la justicia en relación con el respeto de los derechos humanos de la víctima es del 13%, y en cuanto al respeto de los derechos humanos del presunto delincuente es del 16%. Dichos datos indican que el derecho al acceso de justicia está siendo vulnerado por los múltiples trámites y demoras que tienen los procesos, trayendo como consecuencia que la percepción y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones a cargo de la justicia se reduzcan.

Sobre el índice de acceso efectivo a la justicia, Bogotá ocupa el quinto puesto entre los 32 departamentos del país, con un puntaje de 5.93 en una escala de 0 a 10, siendo el departamento con mayor puntaje

Quindío con 6.47 y el de menor puntaje Amazonas con 3.19 (Departamento Nacional de Planeación, 2017). Los resultados indican que la ciudad debe mejorar, pues es tan solo un poco más de la mitad del total del puntaje que podría obtener.

Eje de construcción de paz

El eje comprende el análisis descriptivo de los indicadores relacionados con información de víctimas del conflicto armado, desmovilizados y construcción de paz en la ciudad. Sobre los derechos de las víctimas localizadas en Bogotá, se encuentra que para el año 2017, el 60,3% de los hogares con al menos una víctima de desplazamiento, habitaban en inmuebles con servicios públicos básicos; el 92,2% de las víctimas estaban afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS); el 92,4% de las personas entre 6 y 17 años asistían a educación preescolar, básica y media, y el 99,77% de personas tuvieron garantías de no repetición de un nuevo hecho victimizante (Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, 2019).

Con relación al número de personas que participaron en actividades de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, a través de ejercicios liderados por la Alta Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, aumentó de manera constante: en 2012, 5.600; 2013, 29.154; 2014, 57.399; y 2015, 57.989. Ello señala un avance positivo en la implementación de la política pública para las víctimas en la ciudad.

Las medidas de reparación integral se constituyen como un derecho que debe ser otorgado de manera diferenciada, transformadora y efectiva a la población víctima del conflicto armado. En cuanto a las medidas de satisfacción, el artículo 139 de la Ley 1448 de 2011 determina que: “Las medidas de satisfacción son aquellas que buscan resarcir el dolor de las víctimas a través de la búsqueda de la verdad, la difusión de la memoria y la dignificación de la población víctima del conflicto armado”. Al respecto, los resultados de la encuesta Goce Efectivo de Derechos de las Víctimas año 2014 muestran que es muy bajo el porcentaje de víctimas de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Víctimas que manifestaron haber recibido medidas de satisfacción (6.8%). Lo anterior evidencia la baja cobertura que ha tenido el reconocimiento simbólico y la dignificación por medio de acciones encaminadas a la construcción de la memoria, la narrativa del conflicto y la reconstrucción de la verdad, como elementos necesarios para la construcción de paz (DANE-Unidad para las Víctimas. Encuesta Goce Efectivo de Derechos EGED, 2013-2014).

Por su parte, las medidas de rehabilitación, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley 1446 de 2011, “(...) se materializan en un conjunto de estrategias, planes y programas que buscan el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas”. Sobre ellas, es importante tener en cuenta que no todas las personas víctimas requieren de medidas de rehabilitación física y psicológica, dado que depende de las afectaciones sufridas por la violencia en el marco del conflicto armado y su disposición voluntaria de recibirla. La estrategia de recuperación familiar es la que mayor preferencia tiene por parte de la población víctima (8.9%), seguida de la atención individual (3.6%), la atención comunitaria (3.2%) y la atención grupal (1.6%) (DANE-Unidad para las víctimas. Encuesta Goce Efectivo de Derechos EGED, 2013-2014).

De otra parte, las medidas de restitución, aquellas que buscan devolver a la víctima al estado anterior en el que se encontraba antes de la ocurrencia del hecho victimizante, se materializan por medio de programas de restitución de tierras, procesos de retorno y reubicación, y medidas financieras de estabilización socioeconómica, entre otras estrategias. Es posible observar que el número de solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) ha tenido una



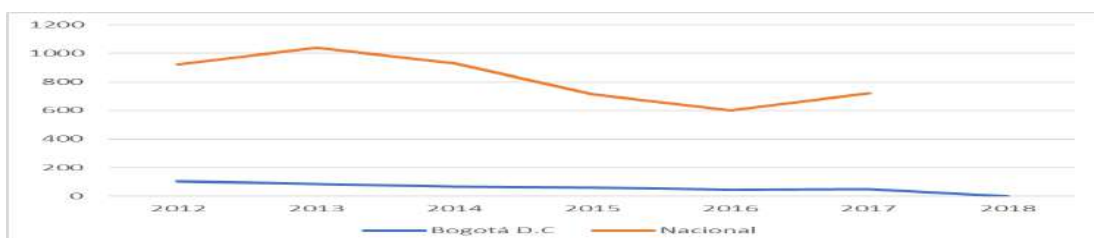
tendencia fluctuante durante el período 2012-2018. Se registra un pico en particular en 2015, año en el cual aumentó el número de solicitudes a 78. En los últimos tres años hay un decrecimiento en este indicador: 48 para el año 2016, 21 para el año 2017 y 9 solicitudes para el 2018 (Unidad de Restitución de Tierras).

Frente a los procesos de retorno y reubicación, la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos encontró que a nivel nacional el 78,6% de los hogares encuestados manifestó haber tomado la decisión de retomar su proyecto de vida en sus lugares de residencia actuales o regresando al municipio de donde fueron desplazados. En Bogotá, el 62,6% de los hogares accedieron a las medidas de retorno y reubicación, siendo un nivel relativamente más bajo que el reflejado en el total nacional (DANE-Unidad para las víctimas. Encuesta Goce Efectivo de Derechos EGED, 2013-2014).

Otra medida de reparación es la indemnización, la cual se define como una compensación de tipo económica y simbólica que otorga el Estado colombiano a las personas víctimas del conflicto armado por los hechos sufridos en el marco de la violencia. Los porcentajes de personas que han accedido a las medidas de indemnización tanto por vía administrativa como judicial son relativamente bajos comparados con la magnitud de la población. Sin embargo, es importante reconocer que la naturaleza de estos procesos es gradual y progresiva, de acuerdo con criterios como presupuesto y sostenibilidad fiscal. Es así como el 9.7% ha recibido indemnización por vía administrativa, el 23% por vía judicial por hechos victimizantes diferentes y el 16.2% por desplazamiento forzado (DANE-Unidad para las víctimas-Encuesta Goce Efectivo de Derechos EGED, 2013-2014). Adicionalmente, para el año 2014, los registros de personas afectadas por hechos victimizantes ocurridos en Bogotá corresponden a un total de 1.259, divididos en 712 registros por desplazamiento y 475 por amenazas. En el año 2016, se presentan menos denuncias de esta índole, con un total de 659 registros, de los cuales 400 fueron por desplazamiento y 252 por amenazas (Observatorio Distrital de Víctimas, 2018).

En la siguiente gráfica se observa el número de personas desmovilizadas de los grupos alzados en armas, durante el periodo 2012-2016, que se encuentran en la ciudad de Bogotá, presentando una tendencia decreciente. En el último año (2017) se observa un aumento de 4 personas excombatientes desmovilizadas.

Gráfica 1. Histórico de personas desmovilizadas en Bogotá (2012 – 2017)



Fuente: Sistema de Información para la Reintegración, Agencia para la Reincorporación y Normalización-ARN.

En contraste, el comportamiento del total nacional ha sido fluctuante y muestra un pico alto en el año 2013 con un total de 1.041 casos de desmovilización.

Tabla 6. Histórico de personas desmovilizadas Bogotá D.C. 2012-2017

Ciudad	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bogotá D.C	103	86	68	60	46	50
Nacional	924	1041	932	713	601	719

Fuente: Sistema de Información para la Reintegración, Agencia para la Reincorporación y Normalización-ARN.

Para el año 2015, la Encuesta Bienal de Culturas del Observatorio de Culturas, respecto al componente de cultura ciudadana y paz, evidencia que la mayoría de las personas (61,5%) manifiestan que si un excombatiente llegara a vivir cerca de su lugar de vivienda tendría una actitud positiva y receptiva. Por el contrario, solo el 11% respondió que le generaría rechazo.

Con relación al imaginario de lo que significa la palabra “paz”, la mayoría de las personas considera que consiste, en primer lugar, en la terminación del conflicto armado (22.3%); en segundo lugar, en que no existan violaciones graves a los derechos humanos (18.7%); en tercer lugar, la derrota de las guerrillas (10.3%); en cuarto lugar, ausencia de todo tipo de violencia (17.3%); en quinto lugar, la reconciliación entre todos(as) los(as) colombianos(as) (12%); en sexto lugar, mayor equidad entre los(as) colombianos(as) (13.7%); y NS/NR (5.7%) (Encuesta Bienal de Culturas 2015; SCRD-Observatorio de Culturas). En lo relativo al componente de participación política, la mayoría de las personas no están de acuerdo en que las personas desmovilizadas se postulen a cargos de elección popular (58.5%) (Encuesta Bienal de Culturas 2015; SCRD-Observatorio de Culturas).

Eje de igualdad y no discriminación

Los principales imaginarios y prácticas discriminatorias que afectan a los diferentes grupos poblacionales se observan en datos recogidos por el Observatorio de Culturas de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2015). Allí se evidencia que en el año 2013 se presentaron los menores porcentajes (10,94%) de personas que consideraban que los enfermos de SIDA debían ser alejados del resto de la población. El 16,88% de personas consideró que por más ayuda que se preste a los indígenas, éstos nunca saldrán del atraso. En otro aspecto, el 17,99% de personas consideró que los negros tienen ciertas limitaciones (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Sobre diferencia de género y derechos de las mujeres, el 31,99% de personas señaló que la educación adecuada para las niñas es la que da preferencia a sus roles de madre y esposa. Con respecto a la relación entre pobreza y delincuencia, el 44,11% de personas consideró que la gente pobre es más propensa a cometer delitos. Por último, los datos muestran que el menor porcentaje de personas que no está de acuerdo con permitir que los homosexuales sean profesores de colegio se presentó en el 2015, con 45,40% (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Ahora bien, el porcentaje más alto se presentó en las personas que consideraron que la gente pobre es más propensa a cometer delitos. Este indicador muestra que para 2011 esta cifra fue de 57,13%, disminuyó en 2013 a 44,1%, y aumentó a 49,60% en 2015. El porcentaje más bajo se presentó en las personas que señalaron que los enfermos de SIDA debían ser alejados del resto de la población. Este indicador para el año 2011 fue de 21,04%, disminuyó a 10,94% en 2013, y aumentó a 19,20% en 2015

(Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Sobre el respeto a la diferencia (2011-2015), en los años 2013 y 2015, a la pregunta: “si una persona desconocida recibe burlas y agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista, usted...”, tanto los hombres como las mujeres respondieron que defenderán al agredido así: para el año 2013 el 43,3% de los hombres y el 49,4% de las mujeres los defendería, y para el año 2015 el 43,3% de los hombres y el 45,8% de las mujeres defendería al agredido (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

En cuanto a la población que sería indiferente frente a este hecho, se registra que, en el 2013, el 31,4% de los hombres y el 23,8% de las mujeres lo sería, lo cual disminuyó en 2015, pues el 18,4% de los hombres y el 14,6% de las mujeres sería indiferente si una persona desconocida recibe burlas y agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista. Finalmente, en el año 2013, la población que ante la misma situación no haría nada por temor fue el 15,4% en hombres y el 18,9% en mujeres, cifra que aumentó en 2015 a 22,1% en hombres y a 25,3% en mujeres (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Es importante resaltar que el porcentaje más alto frente a todas las posibles respuestas de “si una persona desconocida recibe burlas y agravios por ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista, usted...” fue *defender al agredido*, lo cual indica que se dejaría a un lado el irrespeto por las identidades y la indiferencia (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Los resultados muestran que la población de hombres que se ha sentido discriminada en la ciudad es de 14,7% en 2013 y de 15,7% en 2015. En cuanto a las mujeres, el 14,4% se sintieron discriminadas en 2013, y el 15,2% en 2015. En el año 2013, el 84,4% de las mujeres y el 84,0% de los hombres no se sintieron discriminados, cifra que disminuyó en 2015 a 83,4% de las mujeres y el 83,3% de los hombres (Observatorio de Culturas de Bogotá D.C. de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2015).

Las Encuestas Multipropósito 2014 y 2017 indagaron sobre la percepción de la población general sobre posibles causas de discriminación asociadas a la raza u origen étnico, el ser hombre o mujer, la orientación sexual, las creencias religiosas, el tamaño, peso o apariencia física y por la identificación con un grupo como emos o skinhead. Los resultados de las dos encuestas indicaron que la causa de discriminación más observada por las y los bogotanos en general fue la relacionada con la orientación sexual por encima de la apariencia, raza y religión. En el año 2014, el 12,2% de las y los bogotanos (682.745) habrían visto a alguien ser víctima de discriminación por su orientación sexual. En el 2017 este porcentaje disminuyó en 1.3%, es decir, el 10.9% de personas (662.499) afirmaron haber visto que alguien haya sido discriminado(a), molestado(a), o que le hayan hecho sentir mal por su orientación sexual. En personas de los sectores LGBTI al igual que en quienes no lo son, la discriminación más frecuentemente observada es la debida a la orientación sexual, equivalente al 35 por ciento. Se puede anotar que la percepción de los sectores LGBTI es tres veces mayor en relación con las personas heterosexuales. Por localidades, entre 2014 y 2017 Teusaquillo y Antonio Nariño son en las que ha disminuido, entre nueve y siete puntos porcentuales la observación de actos de discriminación en relación con la orientación sexual. En el año 2017 Santa Fe y Candelaria son las localidades en las que se ha observado mayor discriminación por orientación sexual y en Usme, Kennedy y Ciudad Bolívar en las que ha aumentado entre tres y seis puntos porcentuales la percepción de discriminación.



En relación con la situación de derechos de las personas de los sectores LGBTI, según la Encuesta Bienal de Culturas 2017, el 35% de las personas de los sectores LGBTI encuestadas expresaron que habían sido discriminadas o sus derechos vulnerados por cualquier razón. Los resultados de esta misma encuesta para 2017 indican que el 16,3% (1.038.827) de las y los bogotanos considera que las personas de los sectores LGBTI son un riesgo para la sociedad.

Con base en los resultados de la Encuesta Bienal de Culturas 2015, el porcentaje de población que opina que las personas en condición de discapacidad pueden ser buenas trabajadoras, pero no en niveles directivos, es del 23%. Si bien no es la mayoría, este indicador evidencia que aún existen imaginarios discriminatorios en la población hacia las personas en condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá.

Sobre los indicadores relacionados con violencia contra las mujeres en sus diferentes modalidades -física, psicológica y sexual-, de acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el porcentaje de feminicidios en el año 2017 tuvo un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2016. Lo anterior evidencia que el feminicidio no sólo es un asunto de implicaciones de tipo penal, sino un problema social y cultural que sigue estando presente en la ciudad. Ello se agrava al observar una tendencia creciente en el total de mujeres víctimas de violencia física entre los años 2013 y 2016, alcanzando un total de 23. 268 casos. En el último año (2017) se presentó una reducción importante de 269 casos con respecto a 2016.

En lo relativo al componente de violencia psicológica sobre las mujeres, los resultados de la Encuesta de Demografía y Salud del año 2011 evidenciaron que, del universo de mujeres que afirmaron haber sufrido este tipo de ataque, 71,5% manifestó que se había ocasionado por algún tipo de control, y en segundo lugar con 50,7% se debía por temas relacionados con celos por parte del agresor (Encuesta Distrital de Demografía y Salud, 2011).

Con relación al indicador de total de mujeres y hombres víctimas de presuntos delitos sexuales, se observa que las mujeres son las más afectadas por este fenómeno en Bogotá. Al respecto, en el período 2015-2017 se encuentra una tendencia decreciente del número de casos de abuso sexual contra las mujeres, con una reducción de 291 casos en este periodo (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses).

La anterior información cuantitativa se complementó con información cualitativa primaria¹⁰ que se obtuvo desde el segundo semestre de 2017 hasta el segundo semestre del año 2018, en el marco de la fase de agenda pública de la Política Pública Integral de Derechos Humanos. A través de la Dirección de Derechos Humanos se realizaron 21 foros locales -1 por cada localidad y 2 en Sumapaz, dadas las singularidades del territorio en esta localidad-, además de un foro distrital. Como actividades complementarias, se hicieron 34 grupos focales y ejercicios de participación efectiva, ampliando la participación hacia poblaciones de especial protección. Allí se recogieron opiniones, actitudes, sentimientos, creencias, situaciones y experiencias de estas poblaciones respecto al goce efectivo de sus derechos.

De igual forma, se incluyeron actores no institucionales relevantes en la garantía y promoción de los derechos en la ciudad y se profundizó sobre barreras presentes en su quehacer, así como oportunidades de mejora para tener en cuenta en la política pública en proceso de formulación. La asistencia total de ciudadanos y ciudadanas a estos escenarios fue de 2.369. Con esta participación se estableció un diálogo

¹⁰ Anexos 2 y 3.

sobre la situación de derechos humanos de la ciudad, desde un análisis diferencial de sujetos y necesidades para la construcción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos.

Con el trabajo estratégico y concertado en cada territorio, se apostó a la generación de confianza con las distintas organizaciones sociales presentes y la ciudadanía, teniendo en cuenta la incorporación de los enfoques de género y diferencial, lo cual permitió recoger las voces de todas y todos para cada uno de los ejes de la Política Pública. Del total de participantes en las 20 localidades, 41.57% se autorreconocieron con el género masculino; 58.3% con el femenino; y 0.12% con el transgénero.

La información cuantitativa y cualitativa que se obtuvo durante la fase de agenda se sistematizó para consolidar los puntos críticos y posteriormente los factores estratégicos. Asimismo, esta información es un insumo para la construcción de los diagnósticos locales que hacen parte de los documentos de la formulación de la política pública.

En la tabla siguiente se presentan los factores estratégicos por ejes y una descripción sucinta de las orientaciones de las acciones, organizados de acuerdo a los cinco ejes que agrupan los derechos humanos.

Tabla 7. Factores estratégicos de los ejes de la Política Pública Integral de Derechos Humanos

Eje	N°	Factor estratégico	Alcances de la intervención para responder a los factores estratégicos
Derechos civiles y políticos ¹¹	1	Amenazas contra la vida y afectaciones contra la libertad e integridad personal de defensoras y defensores de DDHH	Proteger la vida y superar afectaciones contra la libertad e integridad personal de los líderes y lideresas defensoras y defensores de derechos humanos reduce el riesgo de amenazas. Para ello, se busca mejorar la efectividad de los mecanismos de seguridad y protección de sus vidas, con lo cual se fortalecen las organizaciones sociales de defensa y se garantiza el libre ejercicio del liderazgo social para la protección de los derechos humanos.
	2	Trata de personas	Contribuir al conocimiento del delito de trata de personas y su comportamiento en el Distrito Capital, aporta a la administración en la toma de decisiones en materia de políticas públicas, programas y proyectos y mitiga el riesgo de afectación del delito a la ciudadanía, a través de la prevención.
	3	Violencia interpersonal en los diferentes escenarios: familiar y espacios públicos	Reducir el uso de la violencia interpersonal como mecanismo para la resolución de conflictos mitiga el riesgo de afectaciones físicas y psicológicas y de homicidios, que afectan especialmente a poblaciones vulnerables. Con ello, se mejora la percepción ciudadana de seguridad, incrementa la confianza y se incentiva la participación ciudadana.
	4	Presencia de grupos delictivos organizados	Reducir el número y bloquear el accionar de grupos delictivos organizados para disminuir los homicidios, la inseguridad, la utilización de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, las amenazas contra denunciantes, la existencia de fronteras invisibles, la participación de excombatientes en actos delictivos.
	5	Hurto	Reducir el hurto y la vulneración del derecho a la propiedad privada para disminuir la inseguridad, la posible pérdida de vidas humanas y las distintas afectaciones físicas y psicológicas sobre víctimas.
	6	Uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad	Erradicar el uso excesivo de la fuerza por parte de la autoridad, aporta a la garantía de los derechos de la ciudadanía, a través del fortalecimiento y aplicación de los enfoques de derechos humanos y diferencial en la prestación de bienes y servicios.

¹¹ En relación con el homicidio, corresponde a un fenómeno de violencia y por lo tanto es multicausal. Busca erradicarse a través de la incidencia de tres factores estratégicos del eje de derechos civiles y políticos, los cuales responden a distintos frentes. El primero, la superación de la violencia interpersonal como mecanismo para la resolución de conflictos, asociado a escenarios cotidianos de violencia, donde se suma el feminicidio; el segundo, la erradicación de grupos delictivos organizados que eviten la utilización de niños, niñas y adolescentes; y el tercero, la disminución del hurto donde se presenta el riesgo de pérdida de vidas humanas en la comisión del delito.



Eje	N°	Factor estratégico	Alcances de la intervención para responder a los factores estratégicos
	7	Inseguridad en entornos escolares	Contar con seguridad en los entornos escolares garantiza la seguridad de la comunidad educativa, de los establecimientos y residencias que rodean las instituciones educativas distritales. A su vez reduce la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, la inseguridad e incrementa el disfrute de los espacios públicos del entorno escolar.
	8	Estigmatizaciones de los procesos organizativos, huelgas y movilizaciones sociales	Reconocer los procesos organizativos y movilizaciones sociales y fortalecer las prácticas asociadas al derecho de reunión a través de mecanismos que incentiven el respeto por diversas ideologías políticas, el derecho a la huelga y formas de expresión como la reunión pacífica.
	9	Bajo apoyo por parte del Estado para el ejercicio del periodismo comunitario	Incrementar el apoyo a los medios comunitarios para el ejercicio de su labor periodística, promueve la libertad de expresión, la formación de la opinión pública y optimiza el trabajo mancomunado entre la institucionalidad y las organizaciones que defienden la libertad de prensa y los medios comunitarios públicos.
	10	Baja participación de la ciudadanía de zonas rurales en escenarios comunitarios, sociales y políticos	Contar con una alta participación de la ciudadanía de zonas rurales en las iniciativas y escenarios de participación de la administración pública aporta a una mayor incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones de la administración, incrementando la confianza hacia las instituciones y fortaleciendo canales de comunicación entre la institucionalidad y la sociedad civil.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA	11	Bajo acceso a los servicios de Salud	Incrementar el acceso a los servicios de salud mitiga los riesgos de afectaciones a la salud de los usuarios del sistema, protegiendo la población vulnerable de cualquier forma de revictimización (población en condición de discapacidad, personas mayores y población víctima del conflicto armado).
	12	Bajo acceso a la educación superior para jóvenes	Mejorar la calidad de la educación de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo público, en los niveles de educación básica y media, ofrece mayores posibilidades de ingreso a la educación superior para estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales, con lo cual se dispone de mayores posibilidades de profesionalización de la población, a su vez, incrementa el capital humano que se traduce en mayores ingresos futuros en el campo laboral.
	13	Baja calidad de la educación en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo público (educación básica y media)	Disponer de una mayor calidad de la educación en niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo público (educación básica y media) incide en la culminación del ciclo de bachillerato mitiga el riesgo de deserción escolar, el consumo temprano de sustancias psicoactivas y de exposición a la delincuencia juvenil.
	14	Alta informalidad laboral en Bogotá	Disponer de mayores oportunidades para la generación de ingresos vía emprendimiento estimula la creación de pequeñas y medianas empresas locales sostenibles, provee nuevas fuentes de empleo aporta a la garantía los derechos laborales, amplía la cobertura de seguridad social, disminuyendo la informalidad laboral para la satisfacción de necesidades básicas y de protección social.
	15	Déficit de vivienda	Reducir el déficit cuantitativo de vivienda incrementa la oferta institucional para adquirir vivienda de interés social y prioritario. Reducir el déficit cualitativo de vivienda, aporta a la construcción de viviendas con estándares mínimos en servicios de saneamiento básico y sismo resistencia con espacios habitacionales adecuados para poblaciones vulnerables.
	16	Bajas oportunidades para el desarrollo de prácticas culturales, recreativas y deportivas	Tener mayores oportunidades para el desarrollo de prácticas culturales, recreativas y deportivas incentiva el trabajo que adelantan grupos culturales, artísticos y deportivos en las distintas localidades, en los que las comunidades participen en actividades culturales y deportivas.
	17	Baja participación ciudadana en escenarios culturales, recreativos y deportivos.	Tener una alta participación ciudadana en escenarios culturales, recreativos y deportivos permite el aprovechamiento de la capacidad instalada en el Distrito con mayor difusión y reconocimiento de estos escenarios y actividades por parte de la ciudadanía.
	18	Conflictos por incumplimiento de la norma entre autoridades ambientales y comunidades sobre el uso de activos estratégicos ambientales	Resolver los conflictos, a través de la aplicación, seguimiento y control de la norma entre autoridades ambientales y comunidades sobre el uso de activos estratégicos ambientales para su protección incentiva el ahorro de agua potable por parte de los usuarios, el mantenimiento de desagües libres de desechos, la disminución de la contaminación auditiva, visual, del aire, de fuentes hídricas, el manejo adecuado de residuos sólidos y la implementación del proceso de reciclaje para toda la ciudad, fortaleciendo la cultura ciudadana.
Atención a la	19	Ineficacia en la atención de los requerimientos de la comunidad ante los operadores de justicia del Distrito	Aplicar los enfoques diferenciales y de derechos humanos al prestar atención a los requerimientos de la comunidad ante los operadores de justicia del Distrito genera atención eficaz de la institución y confianza en la ciudadanía para acudir a estos.



Eje	N°	Factor estratégico	Alcances de la intervención para responder a los factores estratégicos
Construcción de paz	20	Desconocimiento de los enfoques de derechos humanos, poblacional-diferencial y de género en la atención por parte de los actores de justicia comunitaria en el marco de sus funciones y atribuciones.	Reconocer por parte de los actores de justicia comunitaria la aplicación de los enfoques de derechos humanos, poblacional-diferencial y de género en el marco de sus funciones y atribuciones aporta para dar respuesta efectiva a las solicitudes y proveer decisiones prontas, incentivando que la ciudadanía acuda a éstos.
	21	Insuficiencia en la atención y respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá	Aumentar la capacidad de atención y respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá permite atender en los tiempos previstos los requerimientos de la ciudadanía, con el conocimiento idóneo para aplicar el Código de Policía, siguiendo los protocolos de seguridad en el tratamiento de la información. Asimismo, al fortalecer el enfoque de derechos humanos y el enfoque diferencial en la prestación de bienes y servicios en la institución se generan mayor seguridad y confianza hacia ella y sus miembros, desincentivando la justicia por mano propia.
	22	Deficiencia en el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el Distrito Capital.	Contar con eficiencia en el funcionamiento del SRPA en el Distrito Capital aporta legitimidad al sistema y estimula el incremento en las denuncias, evitando la reincidencia y protegiendo los derechos de los adolescentes infractores, al capacitar a los y las funcionarios/as en enfoque de derechos humanos y diferencial, así como proveer alternativas para evitar el delito entre esta población y el fortalecimiento de la justicia restaurativa.
	23	Baja apropiación del conocimiento de los derechos humanos y enfoques diferenciales por parte de la ciudadanía	Incrementar la apropiación del conocimiento de los derechos humanos y enfoque diferencial por parte de la ciudadanía contribuye a una mayor exigibilidad de sus derechos, aplicando el enfoque diferencial y territorial en los programas de educación en derechos humanos y paz e incrementando su divulgación y cobertura.
	24	Uso de las violencias por parte de la ciudadanía como mecanismo para tramitar los conflictos	Usar medios pacíficos por parte de la ciudadanía como mecanismo para tramitar conflictos aporta a la resolución de conflictos de manera pacífica, protegiendo la vida e integridad personal, mitigando el riesgo de afectaciones psicosociales en la ciudadanía y fortaleciendo la seguridad ciudadana y fortaleciendo procesos de construcción de paz.
	25	Estigmatización de los procesos organizativos del campesinado en Bogotá	Reconocer los procesos organizativos del campesinado en Bogotá estimula la confianza de la comunidad hacia la institucionalidad, fortaleciendo dichos procesos y protegiendo sus derechos en los territorios e incentivando la integración urbano-rural de la ciudad.
	26	Bajo conocimiento de la ciudadanía sobre las consecuencias en Bogotá del conflicto armado interno	Contar la ciudadanía con un mayor conocimiento sobre las consecuencias del conflicto armado interno aporta a una sensibilización y participación ciudadana más amplia en procesos de construcción de memoria y paz, alrededor del impacto del conflicto en Bogotá, mejorando los procesos de reparación integral para la construcción de paz.
	27	Riesgo de vulneración de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá	Mitigar el riesgo de vulneración de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá mejora su calidad de vida, procurando la reducción de la revictimización y de posibles riesgos por afectaciones psicosociales, articulando la oferta interinstitucional de servicios, con una atención con enfoque diferencial para las víctimas, propiciando su inclusión social.
	28	Baja consolidación y pertinencia de las estrategias de reconciliación entre víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reintegración y reincorporación	Disponer de una mayor consolidación y pertinencia de las estrategias de reconciliación entre víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reintegración y reincorporación aporta a la mitigación del riesgo de revictimización y a la protección de sus derechos, impulsando la reconstrucción del tejido social.
Igualdad	29	Bajo reconocimiento social y económico de personas en procesos de reintegración y reincorporación	Contar con un mayor reconocimiento social y económico de las personas que participan en los procesos de reintegración y reincorporación social y económica amplía las oportunidades productivas y laborales, especialmente a jóvenes y mujeres, mitigando el riesgo de vulneración de los derechos, protegiendo la vida e integridad de quienes hacen parte de estos procesos, alejándolos de grupos organizados ilegales y de la reincidencia en grupos armados ilegales (GAI).
	30	Violencias por imaginarios, estereotipos y prácticas discriminatorias hacia las	Disminuir las violencias a través de transformaciones culturales de imaginarios, estereotipos y prácticas discriminatorias por parte de la ciudadanía y servidores públicos hacia las 14 poblaciones, garantiza el goce efectivo de derechos, en términos de



Eje	N°	Factor estratégico	Alcances de la intervención para responder a los factores estratégicos
		14 poblaciones identificadas en el eje.	corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, superando la normalización de violencias contra estas poblaciones.
	31	Baja participación social y política de mujeres, personas mayores, personas de los sectores LGBTI, personas con discapacidad, pueblo Rrom, comunidad Palenquera, Raizales y Afrocolombiana.	Obtener una mayor participación social y política de mujeres, personas mayores, personas de los sectores LGBTI, personas con discapacidad, pueblo Rrom, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, aporta al incremento de la incidencia de la participación ciudadana en las agendas públicas y a un mayor reconocimiento de estos grupos poblacionales como sujetos de derechos.
	32	Vulneración del derecho a la ciudad de personas mayores y personas con discapacidad	Garantizar el derecho a la ciudad de personas mayores y personas con discapacidad, incentiva su accesibilidad, disminuyendo la accidentalidad, con un menor riesgo de vulneración al derecho a la autonomía y una mayor aceptación e inclusión social hacia estas personas.
	33	Escaso reconocimiento de las necesidades e intereses de la población campesina	Contar con un mayor reconocimiento de las necesidades e intereses de la población campesina en el Distrito, aporta a la mitigación de la vulneración de derechos humanos de las campesinas y campesinos, con el acercamiento de las instituciones distritales encargadas de su atención, eliminando los imaginarios que subvaloran a los campesinos y campesinas y fortaleciendo la incorporación del enfoque diferencial-territorial en los servicios institucionales para esta población.
	34	Baja autonomía económica de mujeres, personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, personas mayores, pueblo Rrom, Palenquero e Indígena	Lograr una mayor autonomía económica en personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad, personas mayores, población del pueblo Rrom, la comunidad palenquera, raizal, afrocolombiana y pueblos indígenas, así como las mujeres, en especial las mujeres transgénero, contribuye a la mitigación del riesgo de mendicidad, pobreza, explotación e informalidad laboral, habitabilidad en calle a través de la transformación de imaginarios y de prácticas discriminatorias que excluyen a estas personas en ámbitos laborales, la capacitación y formación para el empleo y la creación de programas para la generación de ingresos vía emprendimiento. Implementar el enfoque de derechos para la atención diferencial es una forma de abordar, comprender e identificar alternativas de respuesta a las necesidades de una población específica, generando condiciones para la garantía del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos y el restablecimiento de los derechos vulnerados, procurando la inclusión y el reconocimiento de sus características y situaciones particulares a través de la prestación de servicios y oferta de bienes del Distrito.
	35	Consumo de sustancias psicoactivas especialmente de jóvenes, niños, niñas y adolescentes.	Reducir el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente de jóvenes, niños, niñas y adolescentes, reduce los riesgos de la utilización de niños, niñas y adolescentes y jóvenes para el expendio y consumo de SPA, la deserción escolar por consumo y la disminución de los riesgos de afectaciones a la salud física y psicológica.
	36	Baja articulación para la implementación de lineamientos sobre el enfoque de derechos humanos que orientan la oferta institucional a través de planes, proyectos, programas y acciones para la superación del fenómeno de habitabilidad de calle, la atención a niños, niñas, personas con discapacidad, personas de los sectores LGBTI grupos étnicos especialmente comunidad palenquera y pueblo Rrom	Fortalecer la red intersectorial que aporta información sobre la situación de derechos humanos de las poblaciones sujeto de especial protección y vulnerables en el Distrito, permitirá la articulación de las entidades y las instancias para la coordinación de sus acciones, la promoción del respeto, la garantía de los derechos humanos y la aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos. De igual forma, monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de los derechos humanos en la ciudad, organizar los programas y proyectos distritales con el fin de lograr una gestión integral, oportuna y efectiva a nivel distrital y local.

Fuente: Elaboración propia Secretaría Distrital de Gobierno, 2019

Cada eje descrito en este diagnóstico evidencia dos aspectos fundamentales. Por un lado, es el reflejo claro de la capacidad ciudadana de posicionar los temas de su interés, en diferentes instancias y por los



medios adecuados, con la colaboración armónica entre la sociedad civil y las instituciones. Por otro lado, estos insumos fundamentan la formulación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos para su garantía en la ciudad de Bogotá.

Formulación de la política

Los puntos críticos, elementos diagnósticos y factores estratégicos recabados durante la fase de agenda pública cristalizan en cinco ejes que estructuran la Política Pública Integral de Derechos Humanos para el Distrito Capital: 1) Derechos civiles y políticos; 2) Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; 3) Acceso a la justicia; 4) Construcción de paz; 5) Igualdad y no discriminación.

i) Eje de derechos civiles y políticos, es decir, aquellos derechos relacionados con las libertades fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, reunión y expresión y el derecho a la participación ciudadana.

ii) Eje de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que contempla el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y generación de ingresos, el derecho a la vivienda y el hábitat, el derecho a la vida cultural y deportiva y el derecho al ambiente sano y al agua potable.

iii) Eje de acceso a la justicia, que se refiere a la posibilidad que tiene toda persona de aprovechar las herramientas y mecanismos legales para solicitar y hacer valer sus derechos mediante el funcionamiento del sistema judicial y no judicial. Esto incluye la oferta de operadores de justicia en el Distrito como los jueces de paz, los conciliadores en equidad y los mecanismos alternativos de solución de conflictos; a la Policía Nacional; y al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

iv) Eje de construcción de paz, que aborda asuntos como la cultura de paz y de derechos humanos, la educación en derechos humanos y paz, el diálogo y convivencia para la paz, los procesos de memoria histórica, las víctimas, la reconciliación y reconstrucción del tejido social y la reintegración y reincorporación social y económica de las personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales.

v) Eje de igualdad y no discriminación, que reconoce especialmente a los grupos y sectores sociales históricamente discriminados, entre los que se cuentan los siguientes: mujeres; personas de los sectores LGBTI; niños, niñas y adolescentes; jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; campesinas y campesinos; habitantes de calle; personas del pueblo Rrom; personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; personas indígenas; y migrantes forzados.

Como se ve, los ejes condensan el conjunto de derechos y libertades reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, los componentes centrales de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos (2014-2034), así como aspectos relevantes del contexto sociopolítico nacional y distrital, cuya prioridad se hizo manifiesta en los escenarios de participación ciudadana desarrollados en la fase de agenda pública.

Aunado a lo anterior, la Política Pública Integral de Derechos Humanos fija cuatro líneas de acción: a) prevención; b) promoción; c) protección; y d) monitoreo, cada una de las cuales recorre transversalmente los ejes y los objetivos de la Política, enunciados a continuación:



Objetivo general

A partir de la identificación de posibles escenarios de vulneración a los derechos humanos, **el objetivo general** de la Política Pública Integral de Derechos Humanos es garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que habitan o transitan Bogotá, a través de la articulación interinstitucional y ciudadana en el marco del Sistema Distrital de Derechos humanos.

Desde esta perspectiva, cada uno de los elementos de la política pública se orienta bajo un objetivo global que gravita en torno a la *garantía de derechos*, entendida como:

Acción que permite construir las condiciones y los entornos (...) para las actuaciones proyectivas de las personas, sea como individuos o como colectividad. En materia de derechos humanos, la garantía debe facilitar el ejercicio de los derechos tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de poder, y con el poder. Garantizar los derechos humanos es una relación múltiple que implica una permanente pluralidad de actores y de personas que ejercen derechos desde diferentes posiciones. A diferencia de otros aspectos de la vida cotidiana en los que se pueden lograr avances y garantías a partir de procesos microsociales, la garantía de los derechos exige una incisiva articulación de procesos micro y macrosociales (Maldonado, 2007, p. 68).

Este objetivo parte del reconocimiento de realidades complejas que se transforman en el tiempo, razón por la cual los resultados deben considerar avances que no son inmediatos, sino que se logran en el corto, mediano y largo plazo, de forma gradual y constante respecto de la situación de derechos humanos de la ciudad. De allí que sea fundamental reconocer que la garantía de los derechos opera bajo el principio de progresividad:

“El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata (...) el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar” (Corte de Justicia de la Nación, 2015).

La articulación interinstitucional y ciudadana se inscribe dentro del objetivo general como aspecto determinante, orientado a conjugar la gestión de las entidades responsables de la implementación de la política pública con las labores de seguimiento emprendidas desde diversas formas organizativas de la sociedad civil, en un marco dialógico común centrado en la garantía de los derechos humanos en la ciudad.

Objetivos específicos

Los objetivos específicos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos se organizan en torno a los cinco ejes de derechos que ella contiene y condensan los resultados esperados, así como los productos del plan de acción, así:

1. Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.



2. Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.
3. Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.
4. Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.
5. Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá, a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.

En el contenido de los objetivos específicos pueden advertirse las líneas de acción esenciales que alientan la creación e implementación de la Política Pública Integral de Derechos humanos. La primera de ellas, la *promoción*, comprende:

[La] Búsqueda de un compromiso del otro (...). La promoción de los derechos humanos no es la difusión de lemas, argumentos o explicaciones sobre los orígenes de los derechos, ni la capacitación o la divulgación, aunque estos tres elementos constituyen instrumentos para desarrollar gran parte de la promoción, ya que por medio de ellos se ponen dos en contacto. La promoción en derechos humanos es la búsqueda de contenido en la que los derechos llegan al sentido de vida de las personas, y éstas los asumen en su vida, acogiéndolos como una conducta diaria, independientemente del instrumento por el cual les llegaron (Maldonado, 2007, p. 68).

En la línea trazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la *Prevención* recoge:

todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales (Corte IDH, 1988, párr. 175).

Para los casos de violencia contra las mujeres, pero igualmente aplicable en un margen extendido a los demás ámbitos de la Política Integral, la Corte Interamericana enfatiza el deber asignado a los Estados de contar con “políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva (...)” (Ibid, 2009, párr. 258). En el marco de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, el alcance otorgado al deber de prevención se traduce consecuentemente en medidas ubicadas dentro de la órbita funcional de la Administración Distrital, sin desmedro de la necesaria colaboración armónica con los restantes poderes públicos en sus escalas territorial y nacional.

Por su parte, la *protección* consiste en:



“Dirigir las actividades hacia el restablecimiento de las condiciones y posibilidades cuando se vean reducidas o violentadas. Que otro reduzca mi defensa y deteriore mis posibilidades y condiciones requiere el restablecimiento. En materia de derechos humanos, la protección requiere mecanismos de protección, ya sea creados socialmente por las relaciones interpersonales que se traducen en formas jurídicas para todos, ya sean creados por el ejercicio del poder, aunque aún no sean plenamente adoptados por toda la sociedad. La protección permanente de los derechos humanos requiere el persistente mejoramiento de los mecanismos para el restablecimiento de los derechos y demanda la creación de nuevos mecanismos, según los cambios (Maldonado, 2007, p. 68).

A efectos de la Política Integral de Derechos Humanos, el *monitoreo* se concibe como un componente de naturaleza transversal, relativo a la interacción constante entre instancias, mecanismos, actores institucionales, fuentes de producción y divulgación de información, insumos e instrumentos de análisis, que orientados bajo criterios técnicos, metodológicos y administrativos, permite obtener, desarrollar y actualizar periódicamente el conocimiento sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad.

Al interior de este engranaje cobran singular relevancia escenarios de coordinación como los consejos consultivos distritales, creados por el Acuerdo 257 de 2006, así como el Sistema Distrital de Derechos Humanos, instituido mediante el Acuerdo 698 de 2018, cuya naturaleza y objeto misional son primordiales para materializar las tareas de seguimiento en los términos descritos, bajo la concurrencia institucional y ciudadana.

Debe considerarse que entre estas líneas de acción no media un orden de prelación jerarquizado, más bien una complementariedad recíproca, una conjunción armónica y unitaria que orienta la política pública desde sus arraigados fundamentos filosóficos, éticos y políticos, hasta sus elementos más puramente operativos y prácticos.

Sectores y entidades corresponsables

Los productos que se establecen en el plan de acción de esta política involucran a todos los sectores de la Administración Distrital que tienen responsabilidades, de acuerdo con sus misionalidades, en la solución de los factores estratégicos que fueron identificados en la fase de agenda pública. En este sentido, el sector Gobierno, como rector de la Política, es el encargado de coordinar las acciones que se derivan fruto del compromiso de los sectores que actúan como responsables y corresponsables.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con los productos esperados, la responsabilidad de la implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos recae sobre 13 de los 15 sectores de la Administración Distrital. Sin embargo, y como se establece en la matriz del plan de acción, todos los sectores tienen un grado de corresponsabilidad en el diseño, implementación y ejecución de los productos esperados.

Dicha corresponsabilidad se entiende como la responsabilidad compartida que tienen las entidades del Distrito y algunas del nivel nacional en la ejecución de las acciones y tareas específicas frente al plan de acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos. Esta se manifiesta a través de la aplicación de dos principios (Ministerio del Interior, 2013):

- Concurrencia: Desarrollar oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido en respeto de sus competencias.



- Complementariedad: Se ha de completar o perfeccionar la prestación de servicios o acciones de los cuales se es corresponsable en el plan de acción de la política pública integral de Derechos Humanos. Esto se hará a través del acompañamiento en espacios de trabajo, talento humano, apoyo técnico y logístico. Lo anterior no involucra recursos financieros.

La construcción del plan de acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos es producto de un largo ejercicio de concertación entre todos los sectores de la Administración Distrital liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno. Esta última entidad organizó diferentes rondas de reuniones con cada sector, de manera independiente, en las que se hizo una presentación de los factores estratégicos establecidos y se inició la construcción conjunta de acciones para dar solución a las posibles vulneraciones de derechos que se presentan en la ciudad.

Como resultado de estas rondas de negociación y del trabajo con los diferentes sectores de la Administración Distrital, se construyeron en total 83 productos esperados, que se encuentran distribuidos y dan respuesta a los cinco objetivos específicos. A continuación, se presentan cuatro tablas: la primera es un resumen de la distribución de productos por eje, la segunda corresponde a la distribución de productos por sectores, la tercera muestra los niveles de corresponsabilidad y, por último, se exponen las instituciones de la Administración Distrital encargadas de la implementación de la Política.

Tabla 8. Número y porcentaje de productos esperados del plan de acción por eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos.

Eje	No. de productos esperados	% productos esperados
Derechos civiles y políticos	16	19,28%
DESCA	20	24,09%
Acceso a la justicia	7	8,44%
Construcción de paz	15	18,07%
Igualdad y no discriminación	25	30,12%
Total productos esperados	83	100%

Elaboración: Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 9. Distribución de los productos del plan de acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos por sector de la Administración Distrital.

Sector	No. Productos esperados	% total productos esperados	Sector	No. Productos esperados	% total productos esperados
Gestión Pública	10	12,05%	Ambiente	2	2,42%
Gobierno	24	28,92%	Movilidad	5	6,02%

Desarrollo Económico, Industria y Turismo	6	7,23%	Hábitat	3	3,61%
Educación	8	9,64%	Mujer	7	8,43%
Salud	4	4,82%	Seguridad, Convivencia y Justicia	8	9,64%
Integración Social	1	1,2%	Gestión Jurídica	2	2,41%
Cultura, Recreación y Deporte	3	3,61%	Total	83	100

Elaboración: Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 10. Entidades de la Administración Distrital encargadas de la implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos.

SECTOR/INSTITUCIÓN	Cultura, Recreación y Deporte
Gestión Pública	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Secretaría General	Ambiente
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital	Secretaría Distrital de Ambiente
Gobierno	Movilidad
Secretaría Distrital de Gobierno	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC	Transmilenio S.A.
Desarrollo Económico, Industria y Turismo	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Hábitat
Instituto Distrital de Turismo	Secretaría Distrital del Hábitat
Educación	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Secretaría de Educación del Distrito	Mujer
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Secretaría Distrital de la Mujer
Salud	Seguridad, Convivencia y Justicia
Secretaría Distrital de Salud	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Integración Social	Gestión Jurídica
Secretaría Distrital de Integración Social	Secretaría Jurídica Distrital

Elaboración: Secretaría Distrital de Gobierno.



Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal y física de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y el Sistema Distrital de Derechos Humanos se realizará a través del Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos, cuyos componentes de seguimiento y evaluación dan soporte a la gestión y cumplimiento de los propósitos y finalidades de la política y el sistema. La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno liderará la coordinación técnica, operativa y tecnológica del Sistema, para garantizar el debido análisis de los insumos, resolver los problemas de disponibilidad y acceso público a la información y así generar el reporte semestral del plan de acción ante la Secretaría Distrital de Planeación.

Su creación se fundamenta en el Acuerdo 698 de 2018, *"por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995"*. En dicho Acuerdo, el artículo 6 orienta la implementación de un Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos *"que contenga los mecanismos de articulación distrital dedicados a la promoción y protección de los Derechos Humanos"*.

Adicionalmente, en el decreto 455 de 2018, *"Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Derechos Humanos, los Comités Locales de Derechos Humanos y se dictan otras disposiciones"*, en el artículo 4, numeral 1, se establece como función del Comité Distrital de Derechos Humanos: *"realizar seguimiento al plan de acción de la Política Integral de Derechos Humanos"*. Asimismo, en el numeral 4 se menciona que *"las entidades que hacen parte de la administración adoptarán y reportarán información al Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos, de que trata el artículo 6 del acuerdo distrital 698 de 2018"*.

El Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos es una plataforma para articular la información en torno a los Derechos Humanos en el orden Distrital, y dentro de sus objetivos se encuentran

- Procesamiento y análisis de la información brindada por las entidades distritales
- Seguimiento y evaluación a la Política Pública Integral de Derechos Humanos
- Generación de insumos e información para el Sistema Distrital de Derechos Humanos
- Monitoreo, seguimiento y evaluación a la situación y los avances en la garantía de los derechos humanos en la ciudad
- Articulación con otros sistemas de nivel nacional, regional y territorial

En este orden, este Sistema de Información contempla el análisis y recopilación de indicadores provenientes de los (15) quince sectores de la Administración Distrital, encargados de la generación y reporte de la información referente a la entrega de bienes y servicios a través de los cuales se dará cumplimiento a los objetivos y a las acciones propuestas en el plan de acción.

Para dar cumplimiento a lo mencionado, los componentes de seguimiento y evaluación acogen (cuando procede) los lineamientos y procedimientos establecidos en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Distrito, y operan dentro del Sistema Distrital de Información de Derechos



Humanos, para verificar la materialización y/o consecución de los logros y objetivos propuestos que tengan como contexto todas aquellas realidades ciudadanas concernientes a las diferentes zonas de escala local de la ciudad de Bogotá, pues a través de ellos se podrán medir los impactos y los logros positivos que son pensados y generados desde lo público. Es importante resaltar que el Sistema de Información tendrá un alcance superior al del seguimiento a la Política, pues se proyecta como una herramienta que contribuya con información e insumos para tomar decisiones públicas. En ese sentido, sus indicadores no son solamente los de la matriz de plan de acción, sino que incluyen muchos más que son necesarios para el correcto monitoreo de la situación de derechos en Bogotá¹².

Seguimiento

El componente de seguimiento de la política se efectúa a través de la matriz del plan de acción, concebida como la herramienta establecida por la Secretaría Distrital de Planeación que condensa todos los productos y los resultados concertados para esta política. En dicha matriz se indican los responsables de cada uno de ellos, la relación entre productos y resultados, sus periodos de ejecución, los recursos financieros necesarios, y la importancia relativa que cada uno representa para el cumplimiento de los objetivos específicos.

Anualmente, cada entidad responsable de la ejecución informará a través de un reporte dirigido a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría Distrital de Gobierno el avance en sus indicadores de producto a través de un reporte cuantitativo y cualitativo. Una vez se hayan recibido los reportes y avances en todos los 83 productos del plan de acción, la Dirección de Derechos Humanos deberá compilarlos y producir, por medio de su componente de Política Pública, un informe sobre el estado de la política en el año reportado. Este informe debe contener, como mínimo, la matriz del plan de acción, con la cual se evidenciará el avance cuantitativo, y un análisis cualitativo que dé cuenta de los asuntos más relevantes en el periodo reportado, esto es, los principales retos para la ejecución, los aprendizajes importantes para la gestión pública, los actores clave que hayan facilitado u obstaculizado el desarrollo de la política, o cualquier otro elemento que por su relevancia deba ser resaltado y, por tanto, tenido en cuenta en los siguientes años. Para esto, se dará la actualización de una línea base cada tres meses, la cual estará definida por indicadores que permitan la medición de la garantía y goce de derechos humanos de la ciudadanía, establecidos en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos y la Política Pública Integral de Derechos Humanos en cada uno de los cinco ejes de derechos.

Además, el informe debe estar articulado con el Sistema Distrital de Derechos Humanos, Comité Distrital y Comités Locales de Derechos Humanos. Los Comités Locales realizarán anualmente una valoración cualitativa y de satisfacción sobre la gestión e impacto de las acciones propuestas en el plan de acción de la Política Pública, en cumplimiento a los objetivos propuestos y a la garantía de los derechos humanos en cada una de las localidades.

Con el reporte periódico realizado por las entidades y la valoración cualitativa de los Comités Locales, la Dirección de Derechos Humanos será la encargada de la elaboración de un documento de análisis que sopesa la información obtenida a través de estos insumos y dé cuenta de la situación y los avances en la garantía de los derechos humanos en la ciudad, los principales retos para la ejecución, u otros aspectos

¹² El Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos es también un producto de la Política Pública Integral, por lo cual cuenta con una ficha técnica en la que se pueden consultar mayores detalles sobre él. Al respecto, veáse la ficha técnica del producto 8.8.1, del eje de Igualdad y no discriminación



que deban ser incluidos debido a su importancia. Este documento se presentará y entrará a consideración ante el Comité Distrital de Derechos Humanos, el cual está encargado de “realizar seguimiento al plan de acción de la Política Integral de Derechos Humanos, y orientar el diseño e implementación de estrategias de promoción y divulgación en materia de Derechos Humanos”, entre otras, con el fin de proyectar una exhortación dirigida a los sectores y entidades responsables con el objeto de tomar decisiones respecto al futuro de la política y su optimización.

El informe será entregado a la Secretaría Distrital de Planeación, para su labor de seguimiento a todas las políticas del Distrito Capital, y finalmente se realizará la publicación del informe sobre la situación, garantía de los derechos humanos y avances en la Política Pública Integral de Derechos Humanos del distrito.

Evaluación

En principio, es importante mencionar que no existe una única fórmula para la adecuada evaluación de una política, plan o proyecto. Se concibe la evaluación como *“el proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública sea esta una norma, programa, plan o política, para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los tomadores de decisiones, gestores públicos y a la ciudadanía”* (DNP, 2014). Esto implica la construcción de un análisis preciso y detallado que estime el cumplimiento del plan de acción para la posterior comparación con un criterio establecido que valore la calidad de la ejecución.

Teniendo en cuenta las particularidades de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, se implementarán dos tipos de evaluaciones de acuerdo con el tiempo de ejecución. En primer lugar, se realizará una *evaluación concomitante o intermedia* que suministre información para detectar y ajustar a tiempo los problemas identificados en la implementación de la política (Roth, 2009), con el fin de controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos en el desarrollo y gestión de la política pública para comprobar la eficiencia operacional y efectividad del proceso de implementación, a través de la identificación de factores favorables o limitantes en la ejecución para la posterior optimización de los resultados, que aumenten las posibilidades de alcanzar los objetivos y metas de esta política.

En segundo lugar, se efectuará una *evaluación ex post* que compone la última etapa del ciclo de la política, la cual permite realizar el análisis de los insumos, actividades y resultados cuando la vida útil de la política finalice. Este tipo de evaluación compara los resultados conseguidos en relación con los objetivos propuestos, midiendo los efectos inmediatos, intermedios y finales, incluyendo el análisis de impacto de lo que se pretendía intervenir. Esta evaluación debe realizarse en el mediano y largo plazo una vez concluida la política (DNP, 2014).

Estos tipos de evaluaciones tienen el alcance de examinar y valorar los productos y resultados estipulados en el plan de acción de la política, con la “finalidad de analizar si la entrega de los productos generados se desarrolló acorde a lo planeado y si se han generado cambios en los indicadores que miden en las condiciones de la población objetivo” (SDP, 2018), con el objetivo de estimar el cumplimiento de las metas y la sostenibilidad de los resultados. La evaluación de los derechos humanos siempre tendrá un carácter cualitativo importante, que podría beneficiarse de la aplicación de indicadores cuantitativos seleccionados.



Esta política tiene un período de implementación que cubre desde el año 2019 hasta el año 2034. El componente de evaluación se desarrollará a partir de tres procesos evaluativos de la siguiente manera: la primera en el mediano plazo, seis años después de su implementación; la segunda en el largo plazo, once años después; y finalmente una evaluación posterior a la vigencia de la política. Lo anterior permitirá comparar los resultados conseguidos con relación a los objetivos propuestos y medir los efectos inmediatos, intermedios y finales, incluyendo el análisis de impacto sobre lo que se intervino (DNP, 2014).

Tabla 11. Tipo de evaluaciones durante la implementación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos y posterior a su ejecución

AÑO	TIPO DE EVALUACIÓN
2025	Concomitante
2030	Concomitante
2035	Ex post

Elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno, 2018

Dentro de este contexto, la batería de indicadores será la piedra angular del seguimiento y la evaluación, dado que permitirá verificar y medir de manera objetiva tanto los productos, como los resultados de acuerdo con el esquema de la cadena de valor (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2007). Asimismo, será un incentivo para generar visibilidad ante los ciudadanos, mayor transparencia y mejora en la toma de decisiones presupuestales y de gestión (DNP, 2003). En este propósito, el adecuado seguimiento y evaluación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos va a depender en proporción considerable de la efectiva gestión interinstitucional en la construcción y aplicación de indicadores e índices para medición de resultados, tal como quedó estipulado dentro del plan de acción (resultados 1.1, 2.7, 2.8, 4.2, 4.4, 5.3, 5.7, 5.8).

Para la eficiente conceptualización, aplicación y monitoreo de la Política Pública de Derechos Humanos, y la selección de los indicadores de derechos humanos como instrumentos indispensables para la evaluación que den cuenta de la ejecución y cumplimiento, se adopta *“un enfoque genérico en la definición de atributos o indicadores basados en los conceptos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Estos son los principios que guían al garante de los derechos cuando facilita y proporciona los “bienes y servicios” pertinentes a los titulares de derechos en el curso del cumplimiento de sus obligaciones”* (OHCHR, 2012).

Tabla 12. Principios y obligaciones de derechos humanos

Disponibilidad	Implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa y se da el cumplimiento de un derecho para toda la población.
-----------------------	---



Accesibilidad	Se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles para todas las personas, sin discriminación alguna. La accesibilidad supone por lo menos estas dimensiones: la no discriminación, la accesibilidad económica y la accesibilidad física.
Aceptabilidad	Implica que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptables por las personas a quienes están dirigidos, lo que conlleva el reconocimiento de especificidades y, consecuentemente, la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho sean modificados de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que van dirigidos en contextos sociales y culturales diversos.
Calidad	Asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.

Adaptado de: Vásquez, D. & Serrano, S. (2013) *Principios y Obligaciones de Derechos Humanos*

Luego de la selección de indicadores se establecerá la línea base, que se constituye como el punto de referencia de la situación actual que se pretende modificar para medir los avances y efectos de la intervención pública. Contar con una línea base es fundamental para determinar el seguimiento y la posterior evaluación de la política (DANE, 2009, pág. 10).

Adicionalmente, estos indicadores darán cuenta de las líneas de intervención de la Política Pública Integral y del Sistema Distrital de Derechos Humanos, por lo que se debe contemplar un cruce de categorías y variables en términos de rutas de atención, estrategias de prevención, procesos de formación, recursos de financiación e instancias de coordinación a escala local y distrital para la garantía de los derechos humanos. Asimismo, dicha información deberá permitir una georreferenciación por localidades y por Unidades de Planeación Zonal.

En este aspecto, para los casos de aquellas variables que no cuenten actualmente con una línea base, se deberá proceder a su construcción y levantamiento a partir de los lineamientos planteados por la Secretaría Distrital de Planeación.

Finalmente, es importante resaltar que en la formulación estratégica se deben incluir indicadores estructurales, de proceso y de resultados, principalmente de proceso, que faciliten la evaluación y den respuesta a la concertación de los compromisos de los sectores e instituciones de gobierno en términos de resultados que sean medibles y faciliten el seguimiento por parte del Comité Distrital y los Comités Locales de Derechos Humanos.



Plan de acción

El plan de acción de la Política Pública Integral de Derechos Humanos (Anexo 1) está estructurado, para el cumplimiento del objetivo general, a partir de los cinco objetivos específicos y contiene un total de 32 resultados esperados a los cuales se aporta con 83 productos (bienes y servicios) alineados con la Agenda 2030 compuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y concertados con los 15 sectores de la Administración. Con esta alineación se busca fortalecer la articulación interinstitucional para promover acciones transversales y mejorar la capacidad del gobierno distrital para cuantificar los avances que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del ambiente (Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, 2018).

Lo anterior se lleva a cabo en la presente política en cumplimiento del propósito de territorialización de la Agenda 2030 establecido en el CONPES 3918/2018, “Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, que implica una identificación precisa de las metas de los ODS a las que se aporta de manera específica con cada uno de los productos de la política. Como se expone en la gráfica 2, los 83 productos del plan de acción aportan al cumplimiento de 33 metas de 11 ODS, lo que convierte a la Política Pública Integral de Derechos Humanos en el primer ejercicio de territorialización de los ODS en el país.



Gráfica 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Política Pública Integral de Derechos Humanos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS	ODS	Metas por ODS	Cantidad de productos del Plan de Acción relacionados
		1.3	1
		3.5	3
		3.8	4
		4.1	1
		4.3	1
		4.5	1
		4.7	7
		4C	1
		5.1	2
		5.2	2
		5.5	1
		8.5	2
		8.6	3
		9.3	2
		10.2	9
		10.3	2
		10.7	1
		11.1	2
		11.2	1
		11A	1
		11B	2
		12.5	3
		16.1	2
		16.2	3
		16.3	5
		16.4	1
		16.6	1
		16.7	12
		16.10	2
		16A	3
		17.7	1
		17.18	1
TOTAL	11	33	83

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

La ponderación relativa de los productos respondió, entre otros, a los siguientes criterios: i) la relación de causalidad entre el producto y el resultado que busca alcanzar, es decir, si el impacto sobre la problemática es directo o está mediado; ii) el tiempo de ejecución del producto durante la duración de la Política Pública; iii) el presupuesto proyectado para su implementación; y iv) el nivel de incidencia sobre las poblaciones de especial protección. La revisión cualitativa del cumplimiento de estos criterios permitió la ubicación de cada producto en una de las siguientes tres categorías de impacto:

Alto: 25 productos¹³ son identificados en esta categoría, con una ponderación relativa de 1.90% exceptuando tres productos que tendrían un valor de 2.56% y dos de 3% dado el impacto esperado con su realización.

Medio: 32 productos¹⁴ son identificados en esta categoría, con una ponderación relativa de 1.08%.

Moderado: 26 productos¹⁵ son identificados en esta categoría, con una ponderación relativa de 0.58%.

A partir de la información anterior se realizó una sumatoria de la ponderación relativa de los productos que se encuentran asociados al cumplimiento de cada resultado. Dicha sumatoria proporcionó la **importancia relativa de los indicadores de resultado** y a su vez la sumatoria de los resultados determinó la **importancia relativa de los objetivos específicos**:

Tabla 13. Resumen de los productos de la Política Pública Integral de Derechos Humanos

Objetivo específico	Importancia relativa del objetivo	Resultado	Importancia relativa del resultado	Cantidad de productos
1. Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	19.7%	1.1	3.1%	3
		1.2	5.1%	4
		1.3	0.6%	1
		1.4	1.9%	1
		1.5	7.4%	5
		1.6	1.7%	2
2. Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para	20.9%	2.1	2.8%	4
		2.2	0.6%	1
		2.3	1.7%	2
		2.4	1.1%	1

¹³ Para conocer al detalle cada uno de estos productos ver el Anexo 1 columna AE numerales:

1.1.1/1.2.4/1.4.1/1.5.3/1.5.4/1.5.5/2.5.2/2.5.3/2.8.1/2.9.1/3.1.1/3.1.2/4.1.4/4.2.1/4.3.1/4.5.1/5.1.2/5.1.4/5.2.1/5.3.1/5.6.4/5.7.2/5.7.3/5.7.5/5.8.1.

¹⁴ Para conocer al detalle cada uno de estos productos ver el Anexo 1 columna AE numerales:

1.2.1/1.2.2/1.2.3/1.5.2/1.6.2/2.1.3/2.3.1/2.4.1/2.5.1/2.5.5/2.6.1/2.7.2/2.8.2/3.2.2/3.3.1/3.4.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/4.2.2/4.3.3/4.4.4/4.5.2/5.1.3/5.1.5/5.1.7/5.1.8/5.2.2/5.2.3/5.4.1/5.6.2/5.6.3.

¹⁵ Para conocer al detalle cada uno de estos productos ver el Anexo 1 columna AE numerales:

1.1.2/1.1.3/1.3.1/1.5.1/1.6.1/2.1.1/2.1.2/2.1.4/2.2.1/2.3.2/2.5.4/2.6.2/2.7.1/3.1.3/3.2.1/4.2.3/4.3.2/4.4.1/4.4.2/4.4.3/5.1.1/5.1.6/5.3.2/5.3.4/5.5.1/5.6.1/5.7.1/5.7.4.



la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.		2.5	6.5%	5
		2.6	1.7%	2
		2.7	1.7%	2
		2.8	3.0%	2
		2.9	1.9%	1
3. Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	8.2%	3.1	4.4%	3
		3.2	1.7%	2
		3.3	1.1%	1
		3.4	1.1%	1
4. Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.	18.1%	4.1	5.1 %	4
		4.2	3.0%	2
		4.3	3.6%	3
		4.4	2.8%	4
		4.5	3.6%	2
5. Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá, a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	33.1%	5.1	10.4%	8
		5.2	3.0%	2
		5.3	3.6%	3
		5.4	1.1%	1
		5.5	0.6%	1
		5.6	4.6%	4
		5.7	6.9%	5
		5.8	3.0%	1
TOTAL	100%	32	100%	83

Fuente: elaboración propia, Secretaría Distrital de Gobierno.

El primer objetivo por importancia relativa, con un **33.1%**, corresponde al **objetivo específico 5**, “Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá, a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos”.

La asignación de esta importancia relativa responde al carácter estratégico que denotan sus productos ya que con ellos se busca asegurar la implementación de los enfoques diferenciales en los bienes y servicios de la administración, y con ello responder a las demandas en materia de derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas. Entre estos productos se resaltan: la construcción e



implementación del Sistema Distrital de Información en Derechos Humanos del Distrito, dada la necesidad de contar con información actualizada y unificada sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad para la mejora en la toma de decisiones; la creación de lineamientos para la efectiva aplicación del enfoque diferencial y de derechos humanos en la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía; así como la estrategia de articulación de rutas de atención y servicios a poblaciones diferenciales en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.

El segundo objetivo por importancia relativa, con un **20.9%**, corresponde al **objetivo específico 2**, “Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá”.

La asignación de esta importancia relativa responde al carácter complementario que constituyen los productos asociados a este objetivo con los esfuerzos administrativos ya existentes, dada la cantidad de acciones que actualmente se adelantan para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales – DESCA-.

Entre los productos a resaltar se encuentran los siguientes: las unidades productivas informales articuladas progresivamente a las dinámicas del sector formal, de acuerdo con las estrategias definidas en la política de productividad para el cierre de brechas y convergencia de las unidades económicas; los instrumentos de política laboral activa, dirigidos a poblaciones con mayor dificultad para acceder a oportunidades de generación de empleo e ingresos; el desarrollo de acciones pedagógicas en las localidades de Bogotá, en el eje temático de Manejo Integral de Residuos sólidos.; y finalmente, la concientización de los usuarios en el Distrito Capital de acuerdo con el documento de Lineamientos del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible - PRAS Proyecto Integral para prestación del servicio público de aseo, en sus líneas de acción 2, 3 y 4 sobre producción limpia, consumo responsable y separación en la fuente, respectivamente.

El tercer objetivo por importancia relativa, con un **19.7%**, corresponde al **objetivo específico 1**, “Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos”.

La asignación de la importancia relativa de este objetivo responde a la relación que tiene el desarrollo de sus productos con los establecidos en los objetivos 2, 3 y 5 que buscan dar solución a los factores sociales que dan origen a las posibles vulneraciones de los derechos civiles y políticos aportando con ello a escenarios que promuevan la garantía de la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá.

Entre los productos a resaltar se encuentran los siguientes: el plan distrital de prevención y protección con el cual se busca identificar las situaciones que puedan generar posibles vulneraciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad; la estrategia orientada a la prevención temprana de violencias y construcción de paz; el programa de articulación intersectorial para la vinculación al sector público de jóvenes con un alto grado de vulnerabilidad social y económica; la estrategia de fortalecimiento y vinculación de actores sociales a la red distrital de derechos humanos, dialogo y convivencia; el centro distrital de estudios de diálogo social y gobernabilidad, y finalmente, los proyectos e iniciativas sociales de la participación ciudadana y acciones organizativas en los territorios rurales mediante el apoyo a organizaciones sociales, comunales y comunitarias en torno a temas de desarrollo social, cuidado ambiental y emprendimientos ciudadanos.



El cuarto objetivo por importancia relativa, con un **18.1%**, corresponde al objetivo **específico 4**, “Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia”.

La asignación de esta importancia relativa responde al carácter estratégico que tienen los productos que constituyen el objetivo, como un aporte para la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir de la construcción de la memoria histórica, la reconciliación y la convivencia ciudadana en concordancia con el contexto nacional de los acuerdos de paz.

Entre los productos a resaltar se encuentran los siguientes: el instructivo para la atención de personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales en el marco de la ruta distrital de prevención y protección de los derechos a la vida, seguridad e integridad personal; la estrategia de educación ciudadana en derechos humanos, paz y reconciliación; los laboratorios de memoria, paz y reconciliación en la ruralidad de Usme y Sumapaz; y finalmente, los documentos de análisis de medición de los indicadores sobre el Goce Efectivo de Derechos de las víctimas.

El quinto y último objetivo por importancia relativa, con un **8.2%**, corresponde al **objetivo específico 3**, “Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos”.

La asignación de la importancia relativa de este objetivo responde al carácter complementario que tienen sus productos con los objetivos 1, 4 y 5; en este último de especial manera con el Sistema Distrital de Información de Derechos Humanos. Los productos enmarcados en el objetivo 3 buscan garantizar el acceso a la justicia a través de la apropiación de los enfoques diferenciales en la prestación de los servicios y bienes, lo cual también se encuentra relacionado con el objetivo 4 en cuanto a los mecanismos de justicia comunitaria.

Entre los productos a resaltar se encuentran los siguientes: el sistema de información distrital sobre justicia que cuente con enfoque territorial, diferencial y de género para la medición del acceso a la justicia en Bogotá; y los procesos y procedimientos para el acceso a la justicia con incorporación del enfoque de Derechos Humanos y enfoques diferenciales.

Financiamiento

El presupuesto para el financiamiento de la Política es el resultado de los procesos de concertación con los sectores administrativos, para el cual cada uno de ellos señala el costo indicativo de los productos que desarrollarán. El presupuesto total de la Política es de \$901.559 millones, que se dividen por objetivo específico como se indica en las tablas 14. Por otra parte, en la tabla 15 se desagrega el presupuesto por sector, entidad y objetivo específico de la Política. Finalmente, conviene mencionar que las cifras en las tablas son indicativas, se presentan en millones de pesos y se aproximan al millar.

Tabla 14. Financiamiento de la Política Pública Integral de Derechos Humanos por objetivo específico

Objetivo Específico	Presupuesto
Total <i>Objetivo 1</i> “Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos”	\$ 100,293
Total <i>Objetivo 2</i> “Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.”	\$ 503,124
Total <i>Objetivo 3</i> “Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.”	\$ 117,174
Total <i>Objetivo 4</i> “Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.”	\$ 40,876
Total <i>Objetivo 5</i> “Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.”	\$ 140,091



Tabla 15. Financiamiento de la Política Pública Integral de Derechos Humanos, periodo 2020 – 2034

TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA								\$ 4,787	
Entidad	Secretaría General de la Alcaldía Mayor					Total de la Entidad		\$ 4,705	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$94	\$98	\$104						\$296
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4.Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$1,195	\$1,565	\$1,649						\$ 4,409
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Entidad	Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital					Total de la Entidad		\$ 82	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la		\$ 15	\$ 16	\$ 16	\$ 17	\$ 18			\$ 82
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	



protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL, SECTOR GOBIERNO								\$ 94,293	
Entidad	Secretaría Distrital de Gobierno					Total de la Entidad		\$ 92,723	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$ 3,417	\$3,788	\$3,665	\$ 3,821	\$ 3,984	\$ 3,886	\$ 2,655	\$ 2,768	\$ 54,837
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 2,886	\$ 3,010	\$ 3,138	\$ 3,272	\$ 3,412	\$ 3,558	\$ 3,710	\$ 3,868	
3.Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 146	\$ 153	\$ 159	\$ 166	\$ 173	\$ 180	\$ 188	\$ 196	\$ 3,264
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 204	\$ 213	\$ 222	\$ 232	\$ 242	\$ 252	\$ 263	\$ 274	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total



4.Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.	\$ 12	\$ 854	\$ 891	\$ 929	\$ 968	\$ 1,009	\$ 1,052	\$ 1,097	\$ 17,451
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 1,144	\$ 1,193	\$ 1,243	\$ 1,296	\$ 1,352	\$ 1,409	\$ 1,469	\$ 1,532	
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 1,609	\$1,866	\$1,946	\$ 1,893	\$ 1,973	\$ 2,058	\$ 479	\$ 500	\$ 17,171
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 521	\$ 543	\$ 566	\$ 591	\$ 616	\$ 642	\$ 669	\$ 698	
	Entidad	Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC					Total de la Entidad		\$ 1,570
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$ 97	\$ 97	\$ 97	\$ 97	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 99	\$ 1,570
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 99	\$ 99	\$ 99	\$ 99	\$ 99	\$ 99	\$ 99	\$ 99	



TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO								\$ 53,572	
Entidad	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico					Total de la Entidad		\$ 53,723	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$ 1,932	\$ 1,984	\$ 2,054	\$ 2,121	\$ 2,190	\$ 2,262	\$ 2,339	\$ 2,419	\$ 40,032
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 2,503	\$ 2,591	\$ 2,683	\$ 2,779	\$ 2,880	\$ 2,986	\$ 3,097	\$ 3,214	
3.Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 572	\$ 601	\$ 631	\$ 663	\$ 696	\$ 730	\$ 767	\$ 805	\$ 13,540
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 846	\$ 888	\$ 932	\$ 979	\$ 1,028	\$ 1,079	\$ 1,133	\$ 1,190	



TOTAL SECTOR EDUCACIÓN								\$ 468,736	
Entidad	Secretaría de Educación del Distrito					Total de la Entidad		\$ 468,736	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$ 277	\$ 285	\$ 285	\$ 303	\$ 312	\$ 321	\$ 331	\$ 341	\$ 5,579
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 351	\$ 362	\$ 373	\$ 384	\$ 395	\$ 407	\$ 419	\$ 432	
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 17,528	\$ 18,399	\$ 19,314	\$ 20,273	\$ 21,281	\$ 22,339	\$ 23,449	\$ 24,614	\$ 413,677
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 25,838	\$ 27,122	\$ 28,471	\$ 29,886	\$ 31,372	\$ 32,932	\$ 34,569	\$ 36,289	
4.Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 885	\$ 911	\$ 939	\$ 967	\$ 996	\$ 1,026	\$ 1,056	\$ 1,088	\$ 17,834
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 1,121	\$ 1,154	\$ 1,189	\$ 1,225	\$ 1,261	\$ 1,299	\$ 1,338	\$ 1,378	



5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 1,614	\$ 1,660	\$ 1,690	\$ 1,738	\$ 1,787	\$ 1,837	\$ 1,887	\$ 1,939	\$ 31,646
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 1,992	\$ 2,045	\$ 2,100	\$ 2,156	\$ 2,212	\$ 2,270	\$ 2,329	\$ 2,389	

TOTAL SECTOR SALUD								\$ 564	
Entidad	Secretaría Distrital de Salud					Total de la Entidad		\$ 564	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.		\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 282
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
		\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 282
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	



de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	
TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL									\$ 166
Entidad	Secretaría Distrital de Integración Social						Total de la Entidad		\$ 166
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.		\$ 26	\$ 56	\$ 27	\$ 28	\$ 29			\$ 166
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	

TOTAL SECTOR CULTURA									\$ 240
Entidad	Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte						Total de la Entidad		\$ 240
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.	\$ 30	\$ 20	\$ 30	\$ 20	\$ 10		\$ 10		\$ 160
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 10		\$ 10		\$ 10		\$ 10		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total



5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20					\$ 80
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	

TOTAL SECTOR AMBIENTE								\$ 6,064	
Entidad	Secretaría Distrital de Ambiente					Total de la Entidad		\$ 6,064	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.		\$ 281	\$ 295	\$ 310	\$ 325	\$ 342	\$ 359	\$ 377	\$ 6,064
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 395	\$ 415	\$ 436	\$ 458	\$ 481	\$ 505	\$ 530	\$ 556	



TOTAL SECTOR MOVILIDAD								\$ 3,111	
Entidad	Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A.					Total de la Entidad		\$ 1,182	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
4.Contribuir a la consolidación de una cultura de paz y derechos humanos a partir del fortalecimiento y la articulación de acciones de la administración distrital y de la sociedad civil para la construcción de la memoria histórica, el tejido social, la reconciliación y la convivencia ciudadana.	\$ 146	\$ 146	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 1,182
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	
Entidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU					Total de la Entidad		\$ 1,824	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	\$ 230		\$ 187		\$ 195		\$ 203		\$ 1,824
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 212		\$ 221		\$ 230		\$ 241	\$ 157	
Entidad	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.					Total de la Entidad		\$ 105	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 105



fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 8	\$ 8	

TOTAL SECTOR HÁBITAT								\$ 40,997	
Entidad	Secretaría Distrital del Hábitat					Total de la Entidad		\$ 2,324	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.		\$ 164	\$ 172	\$ 180	\$ 189	\$ 199	\$ 209	\$ 219	\$ 2,324
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 230	\$ 242	\$ 254	\$ 266					
Entidad	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP					Total de la Entidad		\$ 38,673	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.	\$ 197	\$ 230	\$ 299	\$ 389	\$ 505	\$ 657	\$ 854	\$ 1,110	\$ 38,673
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 1,443	\$ 1,876	\$ 2,439	\$ 3,171	\$ 4,122	\$ 5,359	\$ 6,966	\$ 9,056	



TOTAL SECTOR MUJER								\$ 76,881	
Entidad	Secretaría Distrital de la Mujer					Total de la Entidad		\$ 76,881	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
2.Coordinar acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos para la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA- en Bogotá.		\$ 106	\$ 153	\$ 231	\$ 268	\$ 271	\$ 74	\$ 77	\$ 1,913
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 80	\$ 83	\$ 86	\$ 90	\$ 93	\$ 97	\$ 101	\$ 105	
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 2,685	\$ 2,731	\$ 2,890	\$ 3,112	\$ 3,397	\$ 3,746	\$ 4,130	\$ 4,616	\$ 74,968
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 5,175	\$ 5,381	\$ 5,596	\$ 5,819	\$ 6,051	\$ 6,292	\$ 6,543	\$ 6,804	

TOTAL SECTOR SEGURIDAD								\$ 151,839	
Entidad	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia					Total de la Entidad		\$ 151,839	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
1.Coordinar acciones para la garantía de los derechos a la integridad personal, las libertades individuales y colectivas, la seguridad y la participación ciudadana en Bogotá, a través de	\$ 1,881	\$ 1,938	\$ 1,996	\$ 2,056	\$ 2,118	\$ 2,182	\$ 2,247	\$ 2,315	\$ 37,929
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	



la promoción, la prevención, la protección y el seguimiento en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos	\$ 2,384	\$ 2,456	\$ 2,529	\$ 2,605	\$ 2,683	\$ 2,763	\$ 2,846	\$ 2,932	
3.Fortalecer el acceso a la justicia en Bogotá, a través de la coordinación de acciones institucionales de promoción, prevención, protección y seguimiento con enfoque de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
	\$ 5,716	\$ 5,887	\$ 6,064	\$ 6,163	\$ 6,349	\$ 6,538	\$ 6,735	\$ 6,936	\$ 113,910
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 7,145	\$ 7,358	\$ 7,579	\$ 7,806	\$ 8,040	\$ 8,281	\$ 8,530	\$ 8,785	

TOTAL SECTOR JURÍDICA								\$ 310	
Entidad	Secretaría Jurídica Distrital					Total de la Entidad		\$ 310	
Objetivo específico	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
5.Promover la igualdad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas en Bogotá D.C., a través de acciones de promoción, prevención, protección y seguimiento para el fortalecimiento de los enfoques de derechos humanos, de género, poblacional, diferencial y territorial en el marco del Sistema Distrital de Derechos Humanos.	\$ 7	\$ 7	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 310
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	



Glosario

Acceso a la justicia: Eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos que aborda los asuntos de i) atención y respuesta de los operadores de justicia en el Distrito; ii) atención y respuesta de jueces de paz, conciliadores en equidad y mecanismos alternativos de solución de conflictos; iii) atención y respuesta de la Policía Nacional; y iv) funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Comité Distrital de Derechos Humanos: Instancia encargada de orientar el Sistema Distrital de Derechos Humanos, al igual que asesorar, apoyar y promover, en aquello que corresponda, la implementación de la Política Integral de Derechos Humanos que sea adoptada en el Distrito Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, 2018).

Construcción de paz: Eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos que tiene como finalidad contribuir en torno a la cultura de paz y de derechos humanos, a partir del abordaje de los siguientes temas: i) educación en derechos humanos y paz; ii) diálogo y convivencia para la paz; iii) procesos de memoria histórica; iv) víctimas, reconciliación y reconstrucción del tejido social; y v) reintegración y reincorporación social y económica de las personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales.

Corresponsabilidad: Concurrencia entre actores estatales, distritales o sociales y acciones contundentes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía en materia de atención, cuidado y protección.

Derechos civiles y políticos: Eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos que aborda los siguientes derechos: i) el derecho a la vida y a la integridad y libertad personal; ii) el derecho a la seguridad personal; iii) el derecho a la libertad de pensamiento, reunión y expresión; y iv) el derecho a la participación ciudadana.

Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA): Eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos que aborda los siguientes derechos: i) derecho a la salud; ii) derecho a la alimentación; iii) derecho a la educación; iv) derecho al trabajo y generación de ingresos; v) derecho a la vivienda y el hábitat; vi) derecho a la vida cultural y deportiva; y vii) derecho al ambiente sano y al agua potable.

Estrategia: Definición de medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos. Para su formulación se consideran las condiciones sociales, institucionales, administrativas, políticas y económicas, entre otras. Se materializa a través de programas, subprogramas y proyectos (Departamento Nacional de Planeación, s.f.).

Formación en Derechos Humanos: Es el conjunto de actividades orientadas a formar ciudadanos y ciudadanas en el Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación, promoviendo la integración de movimientos o grupos sociales a la Red Distrital para la Promoción de Derechos Humanos, Convivencia y Diálogo Social, como herramienta de cohesión



social para fortalecer e impulsar las capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones como promotores de cambio en cada una de las localidades de la ciudad (Secretaría Distrital de Gobierno, 2018).

Grupos Delictivos Organizados: Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000).

Igualdad y no discriminación: Eje de la Política Pública Integral de Derechos Humanos que tiene como finalidad implementar medidas concertadas, que contribuyan a eliminar prácticas discriminatorias en todos los ámbitos sociales e institucionales, así como garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad para toda la ciudadanía, especialmente a los sujetos históricamente discriminados (mujeres; personas de los sectores LGBTI; niños, niñas y adolescentes; jóvenes; personas mayores; personas con discapacidad; campesinas y campesinos; habitantes de calle; personas del pueblo Rrom; personas afrodescendientes, raizales y palenqueras; personas indígenas; y migrantes forzados).

Población de Especial Protección: Poblaciones que por condiciones territoriales, culturales, etarias, físicas o mentales se encuentran expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad o violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales, lo que les brinda el otorgamiento de una especial atención del Estado a través de una diferenciación positiva, que atienda a sus condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propenda a través de un trato preferente por materializar el goce efectivo de sus derechos (Corte Constitucional de Colombia, 2009).

Política Pública: Se inscribe como un proceso de planeación que define una visión de largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos y orienta el proceso de cambio frente a realidades sociales relevantes. Es un instrumento de planeación orientado a la acción para lograr objetivos prioritarios, fruto de un proceso de concertación intersectorial y co-creación, en el que participa la administración distrital, la ciudadanía, la sociedad civil, los gremios, la academia, etc. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017).

Prevención: Medidas destinadas por el Distrito, para evitar que actos o situaciones generen amenaza, vulneración o violación de uno o varios derechos humanos de los y/o las ciudadanas (Ley Estatutaria No. 1622, 2013).

Principio de Progresividad: Establecimientos de procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente hasta lograr la restitución y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales (IDPAC, s.f.)

Promoción: Medidas dispuestas por el Distrito para visibilizar, difundir y socializar el contenido y rutas para la garantía de los derechos humanos con el fin de activar su pleno ejercicio y realización (Ley Estatutaria No. 1622, 2013).



Protección: Medidas generadas por el Distrito para detener amenazas, vulneraciones o violaciones a los derechos humanos de los y/o las ciudadanas, o para restablecerlos plenamente cuando la vulneración o violación se haya consumado (Ley Estatutaria No. 1622, 2013).

Seguimiento: Función continua que, a partir de la recopilación sistemática de datos e información sobre el cumplimiento de indicadores, permite dar cuenta del avance y logro de los objetivos definidos (Departamento Nacional de Planeación, 2014).

Sistema Distrital de Derechos Humanos: Es una plataforma para la articulación de la normativa, las políticas públicas, los programas y las entidades e instancias de los niveles Nacional, Distrital y Local, con competencias en materia de Derechos Humanos. Encargado de promover el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos, para la construcción de la paz, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos en el Distrito Capital; realizar las acciones de coordinación interinstitucional para organizar la oferta pública en Derechos Humanos, por medio de un plan de acción anual; apoyar la estructuración de un mecanismo de información, que refleje el contexto Distrital en materia de derechos humanos, que permita proveer insumos que guíen la adopción de medidas de prevención y garantía (Concejo de Bogotá, D.C, 2018).



Bibliografía

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (03 de agosto de 2018). Decreto 455 de 2018. Obtenido de <http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=80423>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (15 de noviembre de 2000). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Obtenido de <https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Convenci%C3%B3n%20de%20Palermo%20ESP.pdf>

Concejo de Bogotá, D.C. (05 de febrero de 2018). Acuerdo 698 de 2018. Obtenido de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73913>

Concejo de Bogotá. (9 de junio de 2016). Acuerdo 645 de 2016. Obtenido de http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Acuerdo_645_2016_Plan_Developmento_Bogota%20Mejor_para_Todos.pdf

Colombia Diversa. (2015). Informe Violencia LGBT Colombia. Recuperado de <http://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/Informe-Violencia-LGBT-Colombia-DDHH-2015.pdf>

Corte Constitucional de Colombia. (2009). Auto 005/09. Obtenido de Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/0

Corte Constitucional de Colombia. (2013). Sentencia T-736/13. Obtenido de http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-736-13.htm#_ftn13

DANE. (2009). Metodología Déficit de Vivienda.

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas. Obtenido de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Cartilla%20Guia%20para%20Seguimiento%20y%20Evaluaci%C3%B3n%20Ago%202013.pdf>

Departamento Nacional de Planeación. (s.f). Glosario. Obtenido de <https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/glosario/Paginas/E.aspx>

IDPAC. (s.f). Glosario. Obtenido de <http://participacionbogota.gov.co/informacion-interes/glosario>

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). (2017). Observatorio de Violencia. Recuperado de <http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-violencia>

Ley Estatutaria No. 1622. (2013). Congreso de la República. Bogotá D.C.



Ministerio de Educación Nacional. (2016). Caracterización de Grupos de Interés. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-138651_recurso_5.pdf

Ministerio de Justicia y del Derecho. (20 de diciembre de 2011). Decreto 4800 de 2011. Obtenido de art. 193: <https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). Promoción social. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/grupos-etnicos.aspx>

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ACNUDH. (2013). Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Obtenido de <http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orientaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf>.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ACNUDH. (s.f.). El derecho internacional de los derechos humanos. Obtenido de <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/internationalallaw.aspx>

Oficina Nacional de Estadística e Información. (2011). Principales Términos Demográficos. Obtenido de http://www.one.cu/publicaciones/cepde/anuario_2011/13_anuario_Principales_Terminos_Demograficos.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de <http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

Secretaría Distrital de Gobierno. (2017). *Bogotá Vive los Derechos Humanos*. Obtenido de Formulación Política Pública de Derechos Humanos: <http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion/participacion-ciudadana/formulacion-politica-publica-derechos-humanos>

Secretaría Distrital de Gobierno. (2018). Dirección de Derechos Humanos. Obtenido de Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación : http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/pde_dhumanos_-_guias-0.pdf

Secretaría Distrital de Planeación. (2017). Guía para la Formulación e Implementación de Políticas Públicas del Distrito.

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (s.f.). Casas de Justicia. Obtenido de <https://scj.gov.co/es/secretaria-de-seguridad/acceso-la-justicia/casas-justicia>

Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH. (2014). Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Colombia.

